

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En los autos Rol N° 16480-18, se deducen los recursos de casación en la forma y en el fondo que luego se detallarán contra la sentencia de 31 de mayo de 2018 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirma los dos fallos dictados por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, ambos con fecha 31 de diciembre de 2015.

En el “primer fallo” -así se aludirá en adelante- se condena como responsables del delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913:

A.- como autores, a Mauricio Alfonso Mazza Alaluf y Luis Alberto Mazza Olmos a la pena efectiva de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y a pagar una multa de 200 unidades tributarias mensuales,

B.- como autores, a José Miguel Mazza Alaluf, Daniel Moisés Mazza Jimenez y María Eugenia Larraguibel Padilla a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y a pagar una multa de 200 unidades tributarias mensuales,

C.- como autor, cometido con negligencia inexcusable, a Mauricio Andrés Margenats Pizarro a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y a pagar una multa de 50 unidades tributarias mensuales,

En el “segundo fallo” -así se le denominará en adelante- se condena como responsables del delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913:



D.- como encubridor, a Allans Antonio Tapia Moreira a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y a pagar una multa de 50 unidades tributarias mensuales, y

E.- como autor, a Yieninson Yapur Cortez a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y a pagar una multa de 200 unidades tributarias mensuales.

Respecto de los mencionados recursos, se ordenó traerlos en relación.

Y considerando:

1º) Que la defensa de Mauricio Mazza Alaluf dedujo, primero, recurso de casación en la forma, fundado en las causales N°s. 9° y 10° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal.

Respecto de la causal del N° 9, en relación con el artículo 500 N° 4 del mismo código, señala, en síntesis, que el fallo no se hace cargo de los reclamos del recurrente referidos a la inexistencia de un vínculo entre Mauricio Mazza y actividades de tráfico de droga; de la alegación de *non bis in idem* esgrimida; de las particularidades del negocio del arbitraje de divisas por medio del sistema de transporte internacional de las mismas a través de “porta valores”; así como de la aplicación de la ley más favorable al acusado por las modificaciones posteriores a los hechos y anteriores al fallo, de la Ley N° 19.913 en virtud de la Ley N° 20.818 de 18 de febrero de 2015, que incluyó una regla de proporcionalidad, que conlleva que la pena asignada al delito de lavado no puede ser mayor a la asignada al delito base. Agrega que el fallo carece de razones o doctrinales para la calificación del delito base y no indica cuál es el tipo penal que supone en este caso en concreto la realización típica de lo que se denomina como narcotráfico.



En relación a la causal del N° 10 del citado artículo 541, explica que el fallo impugnado se extendió a puntos que jamás fueron parte de la acusación.

Pide invalidar la sentencia impugnada y en la de reemplazo absolver al acusado.

2°) Que en representación de Mauricio Mazza Alaluf se interpone también recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando la infracción de los artículos 456 bis, 457 y 488 N° 1 del Código de Procedimiento Penal.

Reclama primero la improcedencia de la valoración de los medios de prueba conforme a la sana crítica y, además, que el establecimiento del origen de los bienes en un delito previo, base o precedente no se basa en hechos reales y probados, sino que en otras presunciones.

Concluye que se ha errado al calificar como delito un hecho que la ley penal no considera como tal.

Solicita invalidar la sentencia y en la de reemplazo absolver al recurrente.

3°) Que en favor de José Miguel Mazza Alaluf y Daniel Mazza Jiménez, se han deducido sendos recursos de casación en la forma por la causal N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 500 N°s. 4 y 5 y 527, inciso primero, del mismo código, por cuanto no existen los hechos constitutivos de alguno de los delitos base idóneos para hablar de lavado de dinero, se condena en razón de una norma que no resulta aplicable a la época de dictación del fallo, y porque el fallo impugnado omite toda consideración respecto de la configuración típica de lo que denomina narcotráfico.



Piden la invalidación del fallo y que en el de reemplazo se absuelva a estos acusados.

4°) Que las defensas de José Miguel Mazza Alaluf, Daniel Mazza Jiménez y Luis Mazza Olmos, también interponen sendos recursos de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 456 bis, 457 y 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal y 27 letra a) de la Ley 19.913 y 1° del Código Penal.

Cuestionan que el fallo se refiera al sistema de valoración de la sana crítica y no al de valoración legal. Asimismo, se vulneran los N°s 1 y 2 del artículo 488 porque no existe ningún medio de prueba legalmente producido que permita afirmar que ha tenido lugar real y probadamente un hecho típico de narcotráfico e igualmente se incumple el elemento de multiplicidad de las presunciones.

Concluyen que se yerra al calificar como delito un hecho que la ley penal no considera como tal

Piden anular el fallo impugnado y dictar uno de carácter absolutorio en su reemplazo en favor de los recurrentes.

5°) Que el apoderado de María Larraguibel Padilla interpone recurso de casación en el fondo, primero, por la causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 2, 15 y demás pertinentes del Código Penal, 27 letra a) de la Ley N° 19.913, y 109, 110 inciso segundo, 464 y 488 del Código de Procedimiento Penal.

Explica que los informes policiales no eran suficientes para la acreditación del delito base, esto es, la existencia del delito de narcotráfico. Del mismo modo, la sentencia recurrida, incurrió en una errónea aplicación de las leyes reguladoras



de la prueba, al dar por establecido el conocimiento por parte de Larraguibel Padilla, del supuesto origen ilícito de los bienes objeto del lavado, al no ponderar adecuadamente diversos testimonios de los que es imposible concluir el conocimiento que la ley requiere para tener por acreditada la faz subjetiva del tipo penal del delito de Lavado de Activos. Añade que los elementos de juicio que refiere conforman un conjunto de presunciones que por reunir los requisitos que al efecto estatuye el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, constituyen plena prueba y por consiguiente, acreditan de modo fehaciente que Larraguibel Padilla era absolutamente ignorante del supuesto origen ilícito de los dineros que se transportaban físicamente a Estados Unidos.

En subsidio de las causales anteriores, deduce las de los N°s. 1 y 7 del mencionado artículo 546, por infracción del inciso 4° del artículo 27 de la Ley N° 19.913, ya que la prueba rendida, en el mejor de los casos, sería suficiente para dar por establecido que Larraguibel Padilla desconoció el supuesto origen ilícito de los euros transportados a Estados Unidos con el supuesto propósito de blanquearlos, por negligencia inexcusable, y no actuando con dolo directo.

Solicita anular la sentencia recurrida y en la de reemplazo absolver a la acusada y, en subsidio, que se declare que Larraguibel Padilla no actuó con dolo, sino con negligencia inexcusable, rebajando su pena en dos grados.

6°) Que en favor de Mauricio Margenats Pizarro se interpone recurso de casación en la forma por la causal del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 N° 4 del mismo código, desde que en esta causa no se probó la existencia de un ilícito de tráfico de estupefacientes que pudiera servir de base al delito de Lavado de Activos, previsto y sancionado



en el artículo 27 letra a) de la ley 19.913, por el que fueron condenados los encausados.

Solicita la nulidad de la sentencia recurrida y que en la de reemplazo se absuelva al acusado.

7º) Que la defensa de Margenats Pizarro formula también recurso de casación en el fondo por la causal N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción del artículo 488 del mismo texto, desde que las presunciones no se fundan en hechos reales y probados, no tienen carácter directo ni concuerdan unas con otras, porque sólo existieron investigaciones por lavado de activos relacionado con narcotráfico, pero no condenas.

Pide la nulidad de la sentencia recurrida y que en la de reemplazo se absuelva al acusado.

8º) Que en favor de Yieninson Yapur Cortez se interpone recurso de casación en la forma por la causal N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 500 N°s. 4 y 5 y 527 del mismo código.

Explica el recurrente que el fallo omite pronunciarse sobre el origen lícito de la suma de dinero recuperada y respecto a la ausencia de un delito previo, delito precedente o delito base como supuesto típico del lavado de dinero.

Además la sentencia obvia la aplicación de la ley más favorable al acusado por las modificaciones de la Ley N° 19.913 en virtud de la Ley N° 20.818 de 18 de febrero de 2015, que incluyó una regla de proporcionalidad, que conlleva que la pena asignada al delito de lavado no puede ser mayor a la asignada al ilícito base. El fallo impugnado igualmente omite toda consideración respecto de la



configuración típica de lo que denomina narcotráfico. Finalmente, la sentencia recurrida omite resolver la petición subsidiaria, en orden a rebajar en un grado la pena impuesta, por aplicación del artículo 68 bis en relación al artículo 11 N° 6 del Código Penal.

Solicita que se anule dicha sentencia y en la de reemplazo se absuelva o, en su caso, se resuelva favorablemente la petición subsidiaria de rebaja en un grado de la pena.

9°) Que la defensa de favor de Yieninson Yapur Cortez deduce también recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 488 N°s. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, 1, 14 y 15 N° 1 del Código Penal y 27 letra a) de la Ley N° 19.913.

Señala que se vulnera el N° 1 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en cuanto el hecho de haber existido investigaciones por supuestos delitos de tráfico de estupefacientes no puede consistir en una presunción para acreditar la existencia del delito base que se funde en hechos reales y probados. Del mismo modo se infringe la primera parte del N° 2 de la misma disposición, en cuanto la concurrencia del hecho básico del narcotráfico no se basa en presunciones múltiples, sino que, en una sola presunción, o incluso, en menos que eso como lo señala el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal pues se trata de informes policiales que tienen el mérito de un antecedente que el juez apreciará conforme a las reglas generales.

Agrega que la sentencia ha calificado como delito de lavado de activos un hecho que es atípico y que la ley no considera como delito, desde que no ha



existido el delito base de tráfico de estupefacientes, el cual se dio por acreditado con infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Pide invalidar la sentencia recurrida, dictando una de reemplazo que absuelva a Yapur Cortez.

10°) Que en favor de Allans Tapia Moreira se deduce recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 456 bis, 457, 482 y 488 N° 1 y 2 de dicho cuerpo legal.

Se configuran estas causales, en opinión del recurrente, por señalar la sentencia que el sistema de valoración es el de la sana crítica. Por otra parte, de todos los antecedentes que obran en el proceso no existe alguno que diga relación con el supuesto delito base de tráfico de drogas, no basándose las presunciones en hechos reales y probados, sino en otra presunción, sin tampoco ser múltiples. Añade que no hay antecedentes para considerar la declaración de Tapia Moreira como una confesión calificada de conformidad al artículo 482 del Código de Procedimiento Penal.

Solicita la nulidad del fallo y en el de reemplazo su absolución.

11°) Que el primer fallo confirmado por la sentencia recurrida, tiene por establecidos los siguientes hechos:

“1) A partir del año 2003, la empresa chilena Turismo Costa Brava S.A., sociedad con actividades comerciales de agencia de viajes, asistencia de turistas, casa de cambio y operadora de divisas, procedió a comprar a las empresas peruanas Amasban S.A. y Money Express, grandes sumas de dinero en moneda extranjera, particularmente euros de alta denominación, sumas que a su vez la



empresa chilena referida vendió a AFEX Los Ángeles de Estados Unidos, entidad que pagó esta compra vendiéndole dólares, divisas que luego la misma empresa Costa Brava S.A., vendió nuevamente a la sociedad Amasban de Perú, sin que esta entidad, de nacionalidad peruana, apareciera actuando directamente con aquella norteamericana.

Asimismo, tal tipo de moneda extranjera (euros) también era adquirida por la empresa chilena Turismo Costa Brava S.A. desde distintas entidades colombianas, en especial desde las empresas Mercafin y Financiero Metro S.A. (FIMESA), actuando en ocasiones esta última a través de la intermediaria, también colombiana, llamada Representaciones Alfa S.A., procediendo luego a trasladar físicamente tales sumas en forma directa a Chile o bien a remitirlas hacia la empresa peruana Amasban S.A. a fin de que desde éstas fueran transportadas, también físicamente, hasta la sociedad Turismo Costa Brava en Chile, para luego continuar con la venta a la empresa estadounidense AFEX Los Ángeles en la forma descrita en el acápite anterior y regresando así las divisas en forma de dólares, a Colombia.

Para llevar a cabo las operaciones narradas, las divisas eran transportadas por "correos humanos", quienes las ingresaban desde dichos países Colombia y Perú hacia Chile, y una vez en el país, las entregaban de diversas formas, ya fuera en las oficinas de la empresa chilena indicada o en aeropuerto de Santiago a una empresa de transporte que las trasladaba hasta la oficina central de la misma, ambas situaciones con el objeto que desde allí fueran llevadas por otro "correo humano" a Estados Unidos, o en una tercera modalidad, mediante la entrega directa y en el mismo aeropuerto al otro sujeto encargado de



transportarlas, en forma inmediata a los Estados Unidos, eventos todos en los cuales, cuando se declaraban, lo hacían como euros de origen chileno, ocultando su procedencia real.

Las personas encargadas de efectuar las labores de desplazamiento señaladas, es decir, de trasladar los euros obtenidos, eran entre otros, los socios de la empresa chilena Turismo Costa Brava, su oficial de cumplimiento, dos empleados de la misma y un sujeto contratado especialmente para tal efecto.

De la forma expresada, estos sujetos hacían pasar flujos monetarios de origen ilícito desplazándose como si fuesen operaciones comerciales reales, toda vez que las empresas colombianas y peruanas, como asimismo los representantes y/o socios de aquellas, se encontraban ligados al ámbito del narcotráfico y del lavado de activos, motivo por el cual han sido objeto de investigaciones llevadas a cabo, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con dichos ilícitos, procediendo, en consecuencia y de esta forma, a participar con el uso, aprovechamiento o destino de tales dineros, sabiendo que dichos valores han sido obtenidos como producto de los delitos señalados, para lo cual, y con el objeto de darle apariencia de un arbitraje de divisas inexistente, se procedió por los individuos a la emisión de documentación ideológicamente falsa, destinada a ocultar o disimular el origen y el destino de las divisas.

2) Asimismo, se encuentra legalmente acreditado en autos que desde a lo menos el año 2004 la Sociedad Turismo Costa Brava S.A., sociedad con actividades de agencia de viajes, asistencia de turistas. casa de cambio y operadora de divisas, sociedad anónima desde el 11 de agosto de 1992, desde cuya fecha su principal objetivo es poder desarrollar actividades ligadas a la



compra y venta de moneda extranjera, domiciliada en calle Agustinas N° 1066, local N° 1062 en la comuna de Santiago Centro. Sociedad conformada por cuatro sujetos, cuya organización está dada y giraba en torno a un gerente de operaciones, quien detentaba dicho cargo en forma autónoma, y en ejercicio de su cargo, simulaba la compra y venta de divisas con el objeto de blanquear dineros que provendrían del narcotráfico.

La casa de cambio aludida, a través de su plana mayor de operadores, contactaron en forma electrónica y telefónica a distintas entidades colombianas, en especial a las denominadas Casa de Cambio Cordillera y Financiera Metro S.A. (FIMESA), ambas dirigidas por sujetos también querellados en autos, vinculados en investigaciones por la Drug Enforcement Administration (DEA), oficina gubernamental de los Estados Unidos en materia de prevención del tráfico ilícito y lavado de activos, y en Colombia por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), investigación N° 116/0801-1588; N° 192243 0801-1588 de la Fiscalía N° 22 (Unidad contra el Lavado de Activos, UNCLA), como responsable de organizaciones dirigidas al blanqueo de activos provenientes del narcotráfico llegándose incluso a ser cancelado el permiso de funcionamiento de una de ellas, según da cuenta la resolución N° 0920 de fecha 2 de junio de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en atención al cuestionamiento real del objeto social por el cual se estableció en Colombia. De igual forma, contactaron a empresas cambistas peruanas, como son Amasban S.A. y Money Express S.A., ambas dirigidas por sujetos también querellados en autos, a su vez vinculados a investigaciones de la DEA y la policía peruana, como el caso penal N° 506010813-2004-5-0 de la 2da Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico



Ilícito de Drogas Sede Lima, como responsables de organizaciones dirigidas al blanqueo de activos provenientes del narcotráfico; es en dicho contexto que la ya sindicada casa de cambio nacional, a través de sus operadores, actuó como intermediaria de las señaladas anteriormente, toda vez que vendió diversas divisas a AFEX Los Ángeles, dinero que en algunas ocasiones era trasladado físicamente por funcionarios de las casas de cambio de origen hasta dependencias de la casa de cambio Turismo Costa Brava S.A. en Santiago, para luego ser enviados a través de los llamados "correos humanos" hasta Los Ángeles, o de otra forma, retirados en el aeropuerto de Lima, en momentos en que el señalado correo iba en viaje transportando las divisas a los Estados Unidos, en dicho intercambio se procedía a retirar la bolsa en que eran transportadas las divisas desde su origen, a fin de que no existiera registro alguno del país del cual venían, esto era de Perú o Colombia; transporte que realizaban no sólo empleados, sino también los mismos socios de la ya indicada casa de cambio, viajes que fueron reiterados en el transcurso del tiempo, llegando a contabilizarse a lo menos 20 viajes por "correo humano".

Esta modalidad era supervisada y a su vez realizada en forma personal por el sindicado gerente, quien no sólo tuvo contacto vía electrónica, sino que también en forma personal, con dos sujetos ligados a las casas de cambio ya indicadas como vinculadas al narcotráfico, Sandro Velit Hurtado y Franklin Ladino Leyton, ciudadano peruano y colombiano respectivamente, quienes arribaron a territorio nacional con fecha 9 de noviembre de 2004, contactándose con el señalado socio y gerente de Turismo Costa Brava S.A. en dependencias de dicha casa de cambio.



Sus operaciones eran finalmente concluidas una vez que las divisas cambiadas o vendidas, eran depositadas en alguna de las cuentas que la ya sindicada casa de cambio mantenía en los Estados Unidos, para luego ser transferidas electrónicamente y mayoritariamente a cuentas de las mismas casas de cambio colombianas, remisoras de las divisas analizadas”.

Estos hechos fueron calificados como delito de Lavado de Activos del artículo 27 letra a) Ley N° 19.913.

12°) Que el segundo fallo confirmado por la sentencia impugnada, tiene por ciertos los siguientes hechos:

“I.- Que entre los meses de junio y agosto de 2007, un sujeto que se desempeñaba como abogado de los procesados en prisión preventiva Luis Mazza Olmos y José Mazza Alaluf, causa seguida por delito de lavado de activos; obtuvo de parte de éstos un poder suficiente para representar a la Sociedad Turismo Costa Brava S.A., sociedad que a esa fecha se encontraba bajo Administración Provisional decretada por este Tribunal; y con dicha personería y sin el conocimiento de la referida administración provisional, se dirigió a la República de Perú con el fin de recuperar la suma de US\$499.192,72.- de parte de la casa de cambio de dicho país, Global Exchange, dinero que provenía de una supuesta operación inconclusa entre las referidas sociedades, aparente arbitraje de divisas que es objeto de investigación en el proceso por vía principal, que no figura en los registros contables de la sindicada administración y que había quedado pendiente como consecuencia de la detención de los encausados en Chile. Una vez rescatados los dineros, son remesados materialmente al país por el abogado referido, sin declarar tales ingresos ante el Servicio de Aduanas, encontrándose



obligado a ello, sin dar cuenta a la autoridad financiera gubernamental respectiva (UAF), ni a la administración provisional de la Sociedad Turismo Costa Brava, ni al Tribunal respectivo; todo ello con el presunto objeto de cubrir los gastos personales y de defensa de los encausados en el cuaderno principal de la presente causa.

II.- Posteriormente, entre los meses de agosto y septiembre de 2007, un sujeto que tenía la calidad de empleado de la Sociedad de Turismo Costa Brava S.A., empresa sujeta a administración provisional por encontrarse procesados sus dueños por el delito de lavado de activos; recibió un monto indeterminado de dineros provenientes de la recuperación de fondos desde Perú efectuada por el abogado Yieninson Yapur Cortez, procesado en estos autos como autor de ilícito previsto en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913, quien viajó con él a Perú a realizar las ya señaladas gestiones para la recuperación de la suma de US\$499.192,72, de parte de la casa de cambio de dicho país, Global Exchange, dineros que provenían de la supuesta operación inconclusa entre las referidas sociedades, aparente arbitraje de divisas que es objeto de investigación en el proceso por vía principal, que no figura en los registros contables de la sindicada administración y que había quedado pendiente como consecuencia de la detención de los encausados en Chile. Este sujeto, empleado de Turismo Costa Brava, no obstante tener conocimiento de la prohibición existente respecto de los bienes de los procesados, los administró conforme a supuestas instrucciones entregadas por los mismos, entregándolos a familiares directos de los inculpados, padre y ex esposa, para solucionar pagos pendientes en los Estados Unidos de Norteamérica, tales como costos de defensa de Mauricio Alfonso Mazza Alaluf,



créditos con bancos extranjeros, supuestas deudas y compensaciones a otros procesados, obteniendo para su propio beneficio, una suma aproximada a los US\$10.000.-”

Estos hechos fueron calificados como delito de Lavado de Activos del artículo 27 letra a) Ley 19.913.

13°) Que como se dijo, la defensa de Mauricio Mazza Alaluf dedujo, primero, recurso de casación en la forma, fundado en la causales N°s. 9 y 10 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal.

14°) Que como ha sido reiteradamente explicado por esta Corte, la causal de casación del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal no tiene por objeto revisar la corrección de la aplicación o interpretación de determinadas normas jurídicas sustantivas efectuada por la sentencia impugnada, sino únicamente examinar si los razonamientos para así decidirlo fueron realizados, quedando reservada la promoción del examen de cualquier error en la aplicación o la falta de aplicación de esas normas, a la respectiva causal del recurso de casación en el fondo.

15°) Que en el caso *sub lite* el fallo en análisis cumple escueta pero de manera suficiente con las exigencias de fundamentación que demanda el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, en particular sobre los reclamos del recurrente referidos a la inexistencia de un vínculo entre Mauricio Mazza Alaluf y actividades de tráfico de droga, en el considerando 18° del primer fallo del *a quo* (no alterado en alzada), se señala:

“El imputado alega que no se le ha vinculado a ningún traficante, alegación que no será considerada en virtud a que se ha logrado comprobar sus vínculos



con Jorge Jiménez Urrego de la empresa Fimesa de Colombia, quien ha sido investigado por tráfico ilícito de estupefacientes en Alemania y en Panamá, según consta en los informes policiales allegados al proceso y en la investigación colombiana Radicado 2810 L.A. de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Dicha investigación, además, contiene en su cuaderno principal N° 3, una carta rogatoria proveniente de Alemania que informa que desde marzo de 2007 se sigue una investigación contra Mauricio Mazza, José Mazza y Roberto Sawicki por sospecha de lavado de dinero a través de una cuenta abierta a nombre de Mauricio Mazza en 1991 disimulando la procedencia de dineros, posiblemente provenientes de negocios de estupefacientes en el área europea (España). Asimismo, el informe policial contenido en el anexo N° 5 de la querella revela vínculos anteriores tanto de Turismo Costa Brava como de Mauricio Mazza con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, específicamente con la operación Amancay, referida al lavado de dinero realizada por el narcotraficante Orlando Guzmán Avila y un vínculo personal con David Camhi, involucrado en lavado de activos con el narcotraficante Manuel Fuentes Cancino.

Asimismo, una vez transportado el dinero a Estados Unidos, recibía instrucciones de parte de los dueños de la empresa colombiana Fimesa sobre la forma en que debía transferir o retornar esos fondos, como consta en las interceptaciones de fax reseñadas en el informe de la BRILAC”.

16°) Que en cuanto a la alegación de *non bis in idem* que habría sido pasada por alto, en el mismo considerando recién referido se expresa que “el encausado [Mauricio Mazza Alaluf] fue procesado y condenado en Estados



Unidos por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y por conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, según consta en la traducción auténtica de la sentencia agregada a fojas 5012 y siguientes, lo cual no se opone a la dictación de una sentencia condenatoria en estos autos, por versar esta causa sobre hechos distintos a los establecidos en el fallo anterior, siendo los de esta causa de mayor gravedad y adjudicándoseles de una calificación jurídica distinta, cual es, la del delito de lavado de dinero, razón por la cual no se vería vulnerado el principio non bis in idem”.

17°) Que sobre las particularidades del negocio del arbitraje de divisas por medio del sistema de transporte internacional de las mismas a través de “porta valores”, el fallo no pasa por alto esas particularidades, sin embargo advierte circunstancias ajenas a las maniobras meramente destinadas a abaratar costos, sino a encubrir operaciones ilícitas de lavado de activo, al expresar en el motivo 6° del primer fallo que:

“las voces "ocultar o disimular" encierran la idea de no develar el origen de una cosa, o mostrarlo de manera diferente a la realidad, o sólo en parte, con un despliegue de comportamientos activos de cualquier índole, no solo en sentido material, pudiendo ser ello ficto, precisamente mediante el abuso de diversas formas jurídicas, que en apariencia, podían estimarse ajustadas a derecho, como en principio puede serlo el arbitraje de divisas realizado”, lo que complementa luego al explicar en el considerando 18° que “el informe adjunto a la querella en su anexo N° 5, explica un reporte de la DEA (Drug Enforcement Administration), en que con fecha 5 de mayo de 2006 Mauricio Mazza fue entrevistado por las autoridades norteamericanas y al ser consultado por las divisas transportadas,



oculta el origen del dinero transportado por éste. Este mismo ánimo de ocultar el origen se manifiesta en una interceptación telefónica de fecha 18 de abril de 2006, en que el encausado le preguntó a su empleado Mauricio Margenats Pizarra si al momento de ingresar al país declaró el dinero que transportaba, señalando este último que no. Ante tal respuesta, Mauricio Mazza le dijo textualmente "a qué bueno". A mayor abundamiento, Juan Carlos Vergara, a fojas 418, fo señala como quien le instruía que si se le controlaba y debía declarar los dineros que transportaba, no dijera que provenían de una casa de cambios, que diera otra explicación; agregando el testigo que la instrucción era llenar la papeleta sobre el monto transportado y si pasaba sin ser controlado debía seguir su trayecto."

Asimismo, el fallo, precisamente examinando las especificidades del negocio de arbitraje de divisas concluye en su motivo 6° que:

"no existe, en el marco de su giro comercial, una justificación financiera, contable y tributaria, de las altas sumas de euros transportadas, de alta denominación, cambiadas a dólares y retornadas a Colombia o invertidas en el extranjero por Turismo Costa Brava". Conclusión que apoya en el informe pericial contable N° 28, elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, contenido en cuaderno separado, señala en sus conclusiones que, "tanto la sociedad Turismo Costa Brava Limitada, como las empresas relacionadas con ésta, sociedad de Turismo, Valores e Inversiones Ltda., y Sociedad de Inversión y Renta Asociada S.A., presentan situaciones que no se ajustan a la normativa contable generalmente aceptada, originando que sus estados contables y financieros no muestren su real situación". Agrega que, "no es posible descartar que Turismo Costa Brava sea sólo una intermediaria en el



traslado de divisas -cuyo origen es imposible de determinar a través de la contabilidad, de un lugar a otro, recibiendo por esto una ganancia previamente establecida con sus dueños". Señala este informe, además, que "en cuanto a los ingresos y gastos de las tres empresas investigadas y las utilidades que éstas obtienen en los años 2004, 2005 y 2006, se demuestra que mientras más elevado es el monto de las operaciones, el nivel de utilidades es menor, quedando en evidencia que el mayor número de éstas no apunta a la obtención de mayores utilidades para sus dueños, sino por el contrario, aquella empresa con menor nivel de operaciones es la que obtiene mayores utilidades". Se señala también que "no existe claridad en el financiamiento de las operaciones que realiza Turismo Costa Brava, ya que por el saldo de la cuenta 'Caja Pesos" al 31 de diciembre de 2004 era de \$88.810.630 y los pagos efectuados por las compras de enero de 2005 con esa cuenta fueron de \$6.855.412-415, insuficiente para cubrir dicho monto, más aún, no alcanza el total de activos que muestra el inventario del año 2004 de la empresa para cubrir esa suma, ya que éstos ascienden sólo a \$527.299.383".

Igualmente considera el fallo, en el mismo sentido, "el informe pericial contable N° 218/2014, del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, que rola a fojas 5150, concluye que se ratifica lo señalado en el Informe Pericial Contable N° 28/2008 respecto a los arbitrajes de divisas, en cuanto a que las ganancias obtenidas en los años analizados 2003 al 2006, no son montos altos y deja en claro que su financiamiento no está dado por dichas operaciones de cambios de monedas extranjeras. Este informe además da cuenta de compras efectuadas por las sociedades investigadas de diversas propiedades y aumentos de capital sin justificación financiera que las sustente".



18°) Que en lo concerniente a que el fallo no da razones para no aplicar el texto del artículo 27 después de su modificación por la Ley N° 20.818, de 18 de febrero de 2015, que incluyó en el inciso final de ese precepto de una regla de proporcionalidad, que conlleva que la pena asignada al delito de lavado no puede ser mayor a la asignada al delito base, tal omisión carece de influencia en lo dispositivo del fallo, pues la sanción impuesta al acusado Mauricio Mazza Alaluf, de todos modos se encuentra dentro del marco de la pena del delito de tráfico de drogas, sea en su texto correspondiente a la Ley N° 19.366 o a la posterior Ley N° 20.000.

19°) Que en lo relacionado a la protesta del recurrente porque el fallo carecería de razones o doctrinales para la calificación del delito base ni tampoco indicaría cuál es el tipo penal que supone en este caso en concreto la realización típica de lo que se denomina como narcotráfico, tales reproches no son efectivos como se lee en el motivo 6° del primer fallo del *a quo*, que se reproduce a continuación:

“Que, en cuanto al origen ilícito del dinero ocultado o disimulado, éste se encuentra evidenciado a partir de diversas pruebas, en especial, las que revelan los nexos e instrucciones recibidas por Turismo Costa Brava de parte de los dueños de la empresa Fimesa, Jorge y Carmen Jiménez Urrego, el primero, acusado por el delito de narcotráfico en Alemania y ambos investigados y acusados por el delito de lavado de activos en Colombia. Asimismo, los encausados operaron con la casa de cambios colombiana Cordillera, cuyo directivo, Rafael Rodríguez Pantaleón, registra procesos judiciales por el delito de lavado de activos en Colombia.



Así, el informe elaborado por la BRILAC, del anexo N° 5 de los documentos adjuntos a la querella, indica que "se constató que la mayor cantidad de divisas que ingresan a Chile por transporte físico, teniendo como destinatario la casa de cambios Turismo Costa Brava, provienen desde Colombia, donde son enviados por la empresa Representaciones Internacionales ALFA S.A., FIMESA, Casa de Cambios Girar, entre otras, las cuales se encuentran relacionadas a operaciones de lavado de activos, ya sea como empresas o personas que participan en ellas". Este mismo informe señala, en su página 39, que según información de inteligencia colombiana, un socio y directivo de la casa de cambios Cordillera, Rafael Rodríguez Pantaleón, no mantendría contactos comerciales con los bancos en Venezuela, por cuanto, existe el temor generalizado en dicho país que este sujeto tendría ingresos de dudosa procedencia vinculados al narcotráfico y al lavado de activos; lo cual también se encuentra mencionado en el oficio N° 9018, remitido por la jefa de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que se encuentra en el anexo N° 15 de los documentos adjuntos a la querella, en el cual se informa que Rafael Rodríguez Pantaleón es un directivo de la casa de cambio Cordillera, y que "tiene procesos por delito de lavado de activos en varias fiscalías colombianas".

Asimismo, el citado informe de la BRILAC señala en sus conclusiones que, gran cantidad de las instrucciones enviadas por FIMESA de Colombia S.A. a la casa de cambio chilena, estaban con el pie de firma y firma propiamente tal de Carmen Rosa Jiménez Urrego o "Carmen Rosa Jiménez Urrego fue condenada en el año 2005 como culpable del delito de Lavado de Activos, ya que ingresó divisas producto de exportaciones ficticias a través de empresas "fachadas",



cuando junto a su hermano Jorge Enrique crearon Alvaro Bejarano Alzate (sic.). Agrega que para el periodo comprendido entre los años 80 a 90 un grupo de aproximadamente 70 empresas en Colombia dedicadas a la supuesta exportación de productos como arroz, cría y levante de animales y productos derivados de los mismos, hacia países europeos como Alemania y otros, en los cuales, según investigación llevada a cabo en el año 1995, al momento de constatar las empresas a donde supuestamente llegaban dichas exportaciones, éstas no existían, es decir, serían "empresas de papel", lo cual según acusaciones hechas por parte de la fiscalía en ese entonces, serían actividades ligadas al narcotráfico. Asimismo, Jorge Jiménez Urrego vinculado también a FIMESA, fue detenido por las autoridades antidrogas de Panamá, ya que era buscado por la Policía Antinarcóticos de Alemania y por INTERPOL Colombia - por estar vinculado a una red criminal a la cual se le decomisaron 200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de vísceras de ganado, así como otros cargamentos de estupefacientes que se traficaron desde Colombia hacia Europa".

Así también, en la carta rogatoria D.A.I. 006196, de fecha 04 de agosto de 2006, remitida por la Dirección de Asuntos Internacionales de Colombia (anexo N° 15 de los documentos adjuntos a la querella), se informa que las personas que remitían dinero a Turismo Costa Brava desde la empresa Fimesa Colombia, presentan antecedentes judiciales. En el caso de Jorge Enrique Jiménez Urrego, éste habría sido capturado en el año 2001 por el delito de narcotráfico, al verse vinculado al envío de 200 kilos de cocaína, camuflados en animales o vísceras de exportación, por lo cual fue extraditado a Alemania. Respecto a Carmen Rosa Jiménez Urrego, la carta rogatoria señala que esta persona presenta



antecedentes judiciales relacionados con el delito de lavado de activos en el proceso S.042.A., ante la Fiscalía Nacional Unidad Nacional para Extinción de Dominio y Contra Lavado de Activos, Bogotá DC N° 12. Además, señala que Rafael Rodríguez Pantaleón, directivo de la casa de cambios Cordillera, que también enviaba divisas a Turismo Costa Brava, registra procesos por el delito de lavado de activos en varias fiscalías colombianas.

En el mismo sentido, se tiene que tanto en Perú como en Colombia se formularon imputaciones contra las personas que remitían divisas a Turismo Costa Brava, como consta en las copias de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción formulados en el proceso NO 567-2008 de! Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Perú, agregadas a fojas 3576; y en el tomo X del cuaderno principal de la causa radicado N° 2810 L.A., seguida ante la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de! Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la República de Colombia. En esta última causa se establece en la acusación, entre otras razones, que "los procesados, valiéndose de una organización conformada por varias empresas y cada uno desde su actividad legalmente reportada, adquirieron, administraron, transportaron y transformaron divisas de origen ilícito con el fin de darles apariencia de legalidad, ocultar y transformar la verdadera naturaleza y origen, valiéndose de una aparente operación legal de arbitraje de divisas". Agrega que "no debe dejarse de soslayo que de acuerdo a la sentencia absolutoria del juzgado de Alemania, el verdadero exportador de la droga incautada, fue la compañía Bonanza, tal acontecimiento emerge como prueba indirecta, en la medida que si tal droga fue encontrada en barriles que contenían bilis de buey, producto que en la actualidad aún



comercializa la familia Jiménez Urrego, ahora a través de Cl. Stones, ello nos lleva a predicar no sólo que el señor Jiménez Urrego sí fue quien dirigió aquél cargamento de droga y que, por ende, ha estado vinculado a actividades al margen de la Ley, como la que en este despacho se le endilga. Complementario de lo anterior lo es que los hermanos Jiménez Urrego estuvieron investigados dentro de un proceso conocido como el caso Bonanza, por el presunto ilícito de exportaciones ficticias, mediante un modus operandi semejante al presente, y aunque han pretendido hacer ver que la decisión fue en su favor, lo cierto es que tal investigación prescribió, pero de ningún modo los absolvieron por su inocencia. Y en este punto debe la Fiscalía contestar que aunque los procesados y sus defensas consideren que por lo antiguo de los hechos en Alemania o de la prescripción del caso Bonanza, no tales acontecimientos carezcan de valor probatorio, al respecto debe acotarse que estos hechos si bien no son prueba directa de los hechos investigados actualmente, sí indican que la familia Jiménez Urrego se ha venido dedicando desde hace varios lustros a actividades ilícitas".

En coherencia con lo que se viene analizando, existen además, otros antecedentes respecto de hechos que si bien, no fueron objeto de la acusación de autos, dan cuenta de la participación que tuvo la empresa Turismo Costa Brava en el lavado de dinero cometido por Orlando Guzmán Ávila, sujeto condenado en Chile por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes contemplado en el artículo 5° de la Ley 19.366 y por el delito de lavado de activos, en las causas Rol N° 32.443-1995, del 2° Juzgado del Crimen de San Antonio, y Rol N° 167.099-2000, del 5° Juzgado del Crimen de Santiago, como consta en extracto de filiación y copia del fallo de la última causa señalada, ordenado agregar como medida para mejor



resolver. En dicho fallo se establece que un sujeto "que cumplía una condena como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, creó una estructura organizacional de carácter familiar destinada a ocultar el origen ilícito de sus ingresos, al blanqueo de capitales provenientes del delito de tráfico ilícito de estupefacientes para el lavado de dinero, ejecutando actos propios de éste con la colaboración de terceros". Agrega el fallo que, durante la primera etapa de la operación de lavado, esto es, la colocación de fondos ilícitos en el mercado financiero, para ocultar su origen, "se abrió la cuenta N° 01-101-148679 de Talin Trading Inciso., abierta el 09 de noviembre de 2000, por Jorge Heriberto Guzmán Ávila en el Global Bank Panamá con un depósito inicial de US\$500.-"; Luego, con fecha 23 de enero de 2001, Jorge Guzmán Ávila ordena al Global Bank de Panamá cobrar un total de US\$1.000.000.- consignados en 5 cheques, por US \$200.000.- emitidos a nombre de Talín Trading Inc., contra la cuenta corriente 26009788 del Banco Israel Discount Bank Of New York, la cual corresponde a una cuenta que mantenía la agencia de turismo y casa de cambios chilena "Turismo Costa Brava", "resultando imposible determinar el origen de los fondos consignados en los cheques emitidos a favor de Talín Trading Inc. lo que permite presumir que los dineros provienen de la misma organización criminal, conformando una serie de actos de encubrimiento del origen ilícito de los fondos". Es decir, este hecho establecido en dicho fallo, el cual fue confirmado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, resulta plenamente coincidente con el modus operandi utilizado en la presente causa respecto a las empresas colombianas con las que operaba Turismo Costa Brava, las cuales recibían desde las cuentas



bancarias que esta empresa mantenía en el extranjero, los dineros derivados del proceso de lavado.

Ratifica la apreciación anterior, la presentación del informe evacuado por la DEA/IRS, cuya copia rola a fojas 2295, en tanto señala, respecto del destino en Estados Unidos de los euros transportados por Turismo Costa Brava que, los chilenos Mazza se encontraron con un agente de Dunbar en el aeropuerto de Los Ángeles; que Afex Banknotes recibía los euros de Chile; que esta empresa en 2002 empezó a comprar divisas de modo general, encontrándose entre sus clientes originales de Sudamérica Turismo Costa Brava; que aproximadamente un 6% del volumen total de Afex Banknotes en 2004 vino directamente de Colombia, y aproximadamente un 60% del volumen total de Afex Banknotes en 2004, se originó en Colombia, pero fue enviado a esta empresa por medio de las siguientes casas de cambio: Global Exchange, World Foreign Exchange, Universal Cambio, Abbot Foreign Exchange, y Turismo Costa Brava; que entre octubre de 2006 y mayo de 2007 un informante se juntó con Ashok Upadhyaya, negociante principal de divisas de Afex Banknotes; que el informante expresó preocupación sobre el aumento de los negocios colombianos, a lo que Upadyhaya le dijo que era la responsabilidad del departamento de cumplimiento determinar si las casas de cambio son legítimas o no; que Upadyhaya le dijo al informante que "dinero es verde, quien sabe de donde viene" y los negocios colombianos traen mucho dinero y sin ellos, Afex Banknotes quizás no podría operar; que finalmente, se recomienda prosecución contra Afex Banknotes por no tener un sistema adecuado contra el blanqueo de divisas. De esta manera, es posible presumir que la empresa a la cual Turismo Costa Brava le vendía finalmente los euros



transportados a Estados Unidos, no contaba con un adecuado control respecto a la licitud del origen de los dineros que compraba, siendo objeto de investigación por parte de las autoridades norteamericanas, a través de la DEA, por no contar con un control apropiado para prevenir actividades de lavado de dinero. siendo probablemente por dicha circunstancia elegida para sus operaciones financieras.

Por otra parte, consta, como se señaló, el despliegue de diversas maniobras tendientes a ocultar el país de origen del dinero, según dan cuenta las interceptaciones telefónicas y los informes policiales les ya reseñados, todo lo cual no resulta explicable razonablemente, como no sea el conocimiento de la ilicitud de sus operaciones y el ánimo de ocultamiento de las mismas.

A lo anterior, cabe agregar que no existe, en el marco de su giro comercial, una justificación financiera, contable y tributaria, de las altas sumas de euros transportadas, de alta denominación, cambiadas a dólares y retornadas a Colombia o invertidas en el extranjero por Turismo Costa Brava. Así, el informe pericial contable N° 28, elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, contenido en cuaderno separado, señala en sus conclusiones que, "tanto la sociedad Turismo Costa Brava Limitada, como las empresas relacionadas con ésta, sociedad de Turismo, Valores e Inversiones Ltda., y Sociedad de Inversión y Renta Asociada S.A., presentan situaciones que no se ajustan a la normativa contable generalmente aceptada, originando que sus estados contables y financieros no muestren su real situación. Agrega que, "no es posible descartar que Turismo Costa Brava sea sólo una intermediaria en el traslado de divisas -cuyo origen es imposible de determinar a través de la contabilidad, de un lugar a otro, recibiendo por esto una ganancia previamente



establecida con sus dueños". Señala este informe, además, que "en cuanto a los ingresos y gastos de las tres empresas investigadas y las utilidades que éstas obtienen en los años 2004, 2005 y 2006, se demuestra que mientras más elevado es el monto de las operaciones, el nivel de utilidades es menor, quedando en evidencia que el mayor número de éstas no apunta a la obtención de mayores utilidades para sus dueños, sino por el contrario, aquella empresa con menor nivel de operaciones es la que obtiene mayores utilidades". Se señala también que "no existe claridad en el financiamiento de las operaciones que realiza Turismo Costa Brava, ya que por el saldo de la cuenta "Caja Pesos" al 31 de diciembre de 2004 era de \$88.810.630 y los pagos efectuados por las compras de enero de 2005 con esa cuenta fueron de \$6.855.412-415, insuficiente para cubrir dicho monto, más aún, no alcanza el total de activos que muestra el inventario del año 2004 de la empresa para cubrir esa suma, ya que éstos ascienden sólo a \$527.299.383".

Por su parte, el informe pericial contable N° 218/2014, del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, que rola a fojas 5150, concluye que se ratifica lo señalado en el Informe Pericial Contable N° 28/2008 respecto a los arbitrajes de divisas, en cuanto a que las ganancias obtenidas en los años analizados 2003 al 2006, no son montos altos y deja en claro que su financiamiento no está dado por dichas operaciones de cambios de monedas extranjeras. Este informe además da cuenta de compras efectuadas por las sociedades investigadas de diversas propiedades y aumentos de capital sin justificación financiera que las sustente.

Asimismo, en la investigación tributaria contenida en el informe efectuado por la división de tráfico de estupefacientes del consejo de defensa del Estado,



contenido en el anexo N° 12 de los documentos adjuntos a la querella, se detallan una serie de inconsistencias e irregularidades en el comportamiento tributario de las empresas investigadas, señalando, entre otras que respecto a las utilidades declaradas, éstas son prácticamente marginales o nulas si se comparan con el aumento explosivo en las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en la moneda extranjera que la sociedad Turismo Costa Brava experimentó a partir del año 2001; que las declaraciones mensuales son poco fidedignas, al no tener un comportamiento medianamente racional; que es posible concluir que el negocio a partir del año 2001, no representa para sus dueños una mejoría en sus niveles de ingresos, por lo tanto, es probable que la sociedad esté siendo utilizada con otros fines, haciendo pasar por sus registros contables y declaraciones de impuestos, grandes flujos monetarios, encubriendo así los verdaderos beneficiarios del negocio ilícito que éste ampara; que la investigada no informó deliberadamente la compra de euros realizada con Perú, maniobra tendiente a ocultar estas operaciones con el fin de que el Servicio de Impuestos Internos, a través del formulario 1862 no pudiera pedir algún tipo de explicación acerca de sus operaciones; que al comparar las distintas informaciones acerca de las ventas del mes de enero del año 2005, nos encontramos que para este período existen cifras distintas, primero y la más voluminosa es el total de las ventas exentas, alcanzó a \$18.142.989.808 declaradas en el formulario 29, luego le sigue lo informado a la UAF, con aproximadamente \$8.111.546.823, y por último, lo informado al Servicio de Impuestos Internos con \$4.915.581.09; que al examinar a los actores, tenemos a tres que se dedican a triangular divisas, de la siguiente forma: primero la investigada Turismo Costa Brava le compra euros a la peruana



Amasban S.A., estos son vendidos a la empresa Afex Los Ángeles, luego esta última le paga los euros con la venta de dólares, y a su vez la investigada paga los euros comprados a la peruana Amasban, con los mismos dólares recibidos de Afex.

Íntimamente vinculado con lo anterior, existen, además antecedentes penales previos en relación al menos a uno de los encausados, quien fue condenado por el delito establecido en el artículo 97 N° 4, inciso primero, del Código Tributario, en la causa Rol N° 185.002-2004, del Ex 2° Juzgado del Crimen de Santiago, según consta en la copia del fallo agregado a fojas 5376, en el cual se establece que durante los años 1999 y 2000, la Sociedad Faro S.A., cuyo representante legal es Mauricio Mazza Alaluf, realizó operaciones comerciales que no fueron ingresadas en la contabilidad de dicha sociedad “sin que se hubiese acreditado legalmente, además, el origen de los dineros utilizados en la concreción de aquéllas”. Este hecho, si bien, no fue objeto de acusación en la presente causa, pero permite ilustrar acerca de las reiteradas irregularidades tributarias y contables en las que incurrían las empresas de propiedad de los encausados, y el mismo como persona natural, las cuales consistían principalmente en la falta de justificación financiera de las operaciones realizadas, mientras más transaban divisas, con un aumento explosivo en las operaciones a partir del año 2001, prácticamente copando el mercado nacional, ello no traía aparejada una mayor utilidad, a lo que se suma el permanente ocultamiento mediante la no declaración a las instituciones respectivas, del ingreso y origen de los altos montos que operaban.



De esta manera, analizada en su conjunto y en forma congruente los medios de prueba aportados, ellos permiten fundar sólidas presunciones que permiten sostener que los dineros manipulados por los encausados en las empresas investigadas en la presente causa, principalmente Turismo Costa Brava Limitada, tienen un origen ilícito, cual es, la comisión del delito de narcotráfico, provenientes de sujetos que operaban a través de empresas colombianas con las que se relacionaba esta empresa, de las cuales ésta recibía dinero en efectivo, de alta denominación. principalmente euros, sin justificación financiera alguna, para posteriormente transportarlo, cambiarlo y retornarlo en dólares desde Estados Unidos, sin cumplir con las exigencias legales, ni los estándares de control de ese país.

Es preciso mencionar. a mayor abundamiento, que en relación a este elemento del tipo, delito base exigido por la ley, esto es, el origen ilícito proveniente del narcotráfico del dinero lavado, sostiene el autor Sergio Politoff, en su obra "Lavado de Dinero y Tráfico Ilícito de Estupefacientes", página 72, que "no es preciso que se haya establecido por sentencia ejecutoriada la existencia del delito anterior que le sirve de presupuesto ya que, de otro modo, si la entera pesquisa del delito de "lavado de dinero" estuviera subordinada a la sentencia ejecutoriada en el proceso por el delito anterior presupuesto de éste (particularmente si se trata de una sentencia extranjera), la disposición que nos ocupa se haría en buena parte ilusoria". Agrega Politoff que, "cuando la ley ha querido que conste al juez la terminación del juicio en que se haya establecido un hecho delictivo precedente, que sirve de presupuesto al delito llamado a juzgar, lo ha dicho expresamente. como acontece con las calumnias e injurias causadas en



juicio, caso en el cual "no podrá entablarse la acción sino después de terminado el litigio en que se causó la calumnia o injuria" (art. 426 CP)". En este caso, por el contrario, la Ley N° 19.913 establece expresamente en el inciso 5° de su artículo 27, que "La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo".(...)

Que en consecuencia, de las circunstancias antes expuestas y, añadidas a las demás pruebas vertidas en autos, llevan a concluir que los hechos investigados se encuadran y satisfacen los presupuestos de! tipo penal de lavado de activos, previsto originalmente en el artículo 12 de la Ley 19.366, y posteriormente artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913"

Complementan dichos razonamientos los motivos 12° y 13° de la sentencia recurrida, al agregar que:

"12°.- Que los elementos de convicción reseñados en el motivo cuarto del fallo recurrido, son suficientes para determinar que la empresa chilena Turismo Costa Brava S.A., desde 2003 y en numerosas oportunidades, previa concertación con entidades peruanas (Amasban S.A. y Money Express) y colombianas (Mercafin y Financiero Metro), las que tanto ellas como sus representantes o socios estaban vinculadas al narcotráfico o lavado de activos, recibía grandes sumas de dinero de éstas, especialmente euros, los que luego cambiaba en la casa de cambios AFEX de Los Angeles, Estados Unidos por dólares americanos, los que depositaba en cuentas que mantenía en ese país, para luego transferirlos



electrónicamente a las mencionadas empresas ubicadas en los dos países sudamericanos reseñados.

La forma de trasladar las sumas de dinero desde esas empresas a nuestro país, era mediante el sistema de “correos humanos”, el mismo modo empleaba para transportar el dinero de Chile hasta Estado Unidos. Las personas encargadas de triangular físicamente el dinero eran los socios de Turismo Costa Brava, o sujetos de su exclusiva confianza.

Así tal sociedad nacional mediante tales maniobras, simulaba la compra y venta de divisas con el objeto de blanquear dinero proveniente de actividades ligadas al narcotráfico, desde que ellas y/o socios o representantes eran investigados por tales operaciones, en tribunales extranjeros.

13°.- Que esta Corte concuerda con el juez a quo en cuanto al sentido e inteligencia que debe dársele al delito base o subyacente exigido por la ley, esto es, el origen ilícito de los bienes provenientes del narcotráfico, en cuanto que si estos bienes están en poder del imputado por lavado de activos, y éste entra en contacto con ellos, comete el delito de lavado de dinero.

Tal conclusión, no sólo se basa en el tenor literal de la ley 19.913, cuyo artículo 27 inciso quinto no exige para el delito base sentencia condenatoria previa que declare la culpabilidad de los responsables y determine penas, sino sólo que tales hechos sean típicos y antijurídicos, --lo que en doctrina se denomina accesoriedad limitada o media--, situación que quedó suficientemente demostrada con los elementos de convicción vertidos y analizados en el considerando sexto del fallo en estudio, como asimismo que los imputados tenían pleno conocimiento del origen del dinero que manipulaban, por ser socios y ejercer cargos de



gerentes, jefes de local y agente de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero en la empresa Turismo Costa Brava.

En este mismo sentido se pronuncia el profesor Sergio Politoff, en su obra “Lavado de Dinero y Tráfico Ilícito de Estupefacientes”, de cuya argumentación se hizo cargo la sentencia en cuestión en el motivo reseñado.

En la misma línea Claudio Prambs Julián, refiriéndose al principio antes referido señala que “la solución de la accesoriedad media, como exigencia del delito previo, bastando, en consecuencia, que éste sea típico (la antijuridicidad se presume) para que los bienes que de él provengan puedan ser objeto material idóneo para el delito de blanqueo de capitales”. “Así, presupuesto del delito de blanqueo de capitales es que el delito previo posea antijuridicidad típica, sin que importe que no concurra la culpabilidad o que, para muchos, exista alguna causal de falta de penalidad”. (El Delito de Blanqueo de Capitales en el Derecho Chileno con Referencia al Derecho Comparado. págs. 265-266)”.

20°) Que en relación a la causal del N° 10 del artículo 541 también invocada en el recurso de casación en la forma interpuesto en favor de Mauricio Mazza Alaluf, explica que en el considerando 6° del primer fallo del a quo, se señala: *“En coherencia con lo que se viene analizando, existen además, otros antecedentes respecto de hechos que si bien, no fueron objeto de la acusación de autos, dan cuenta de la participación que tuvo la empresa Turismo Costa Brava en el lavado dinero cometido por Orlando Guzmán Ávila, sujeto condenado en Chile por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes contemplado en el artículo 5° de la ley 19,366 y por el delito de lavado de activos, en la causa rol N° 32.443-1995, del 2° Juzgado del Crimen de San Antonio y por el delito de lavado de activos en el rol*



N° 167.099-200, del 5° juzgado del Crimen de Santiago”. El párrafo transcrito, en opinión del recurrente, es una manifestación explícita de cómo la fundamentación del fallo impugnado se extendió a puntos que jamás fueron parte de la acusación como lo afirma el propio fallo. Esto además teniendo en consideración que las sentencias citadas son relativas a hechos anteriores al 2003, y por lo tanto, previas a los hechos materia de la presente causa.

Al respecto, los antecedentes a que hace referencia la sentencia, se exponen únicamente a mayor consideración, sólo para ratificar sus conclusiones alcanzadas mediante el resto de la prueba reunida, de manera que aun prescindiendo de los mismos no se altera lo decidido, con lo cual ese aparente defecto carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, extremo sin el cual el recurso no puede ser acogido.

21°) Que también en representación de Mauricio Mazza Alaluf se interpuso también recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando la infracción de los artículos 456 bis, 457 y 488 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, reclamando primero la improcedencia de la valoración de los medios de prueba conforme a la sana crítica y, además, que el establecimiento del origen de los bienes en un delito previo, base o precedente, no se sustenta en hechos reales y probados, sino que en otras presunciones. Concluye que se ha errado al calificar como delito un hecho que la ley penal no considera como tal.

22°) Que respecto al mencionado artículo 456 bis, como ha sido uniforme la jurisprudencia de esta Corte, *“no constituye una norma reguladora de la prueba, sino sólo una disposición que indica a los jueces el grado de convicción que*



deben lograr para dictar sentencia condenatoria, pero no señala el peso de la prueba o rechaza un medio probatorio que la ley permita o admite uno que repudia o modifica, negando o alterando el valor probatorio que ésta asigna a los diversos medios establecidos” (SSCS Rol N° 5.000-17 de 29 de mayo de 2017 y Rol N° 12.931-18 de 25 de septiembre de 2020).

En relación al artículo 457, éste sólo enumera los medios por los cuales se acreditan los hechos en un juicio criminal, sin que se haya explicado en el arbitrio -ni tampoco lo advierta esta Corte- de qué manera este precepto fue vulnerado por los sentenciadores con su decisión.

En lo tocante al artículo 488, como se lee en el texto transcrito en el considerando 19° *at supra*, las presunciones conforme a las cuales la sentencia impugnada establece el origen de los bienes objeto del delito de lavado de activos imputado a Mauricio Mazza Alaluf se fundan en hechos reales y probados y no en otras presunciones y, además, son múltiples, cumpliendo así los únicos extremos de los N°s. 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que pueden ser revisados por esta Corte como normas reguladoras de la prueba, según su uniforme y estable jurisprudencia.

Y sobre la referencia que efectúa el fallo a la sana crítica, tal equivocada mención carece de toda influencia en lo dispositivo del fallo, desde que igualmente la sentencia valora la prueba ciñéndose a las normas del Código de Procedimiento Penal, en particular a sus artículos 456 bis y 488 como expresamente lo indica el primer fallo de primera instancia.

No demostrándose entonces la infracción de una norma reguladora de la prueba, la causal 7a del artículo 546 debe ser desestimada, lo que importa que los



hechos asentados en la sentencia en estudio no pueden ser alterados, hechos que se subsumen en el delito de lavados de activos como correctamente lo concluyen los jueces de la instancia, motivo por el cual la causal del N° 3 del citado artículo 546 también será rechazada.

23°) Que en favor de José Miguel Mazza Alaluf y Daniel Mazza Jiménez, se han deducido sendos recursos de casación en la forma por la causal N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 500 N°s. 4 y 5 y 527, inciso primero, del mismo código, por cuanto no existen los hechos constitutivos de alguno de los delitos base idóneos para hablar de lavado de dinero, se condena en razón de una norma que no resulta aplicable a la época de dictación del fallo, y porque el fallo impugnado omite toda consideración respecto de la configuración típica de lo que denomina narcotráfico.

24°) Que sobre los reseñados reclamos ya se ha hecho cargo esta sentencia en sus considerandos 14°, 18° y 19°, a los que nos remitimos.

Pero además el primer fallo del *a quo*, confirmado en alzada, examina los aspectos que los recurrentes José Miguel Mazza Alaluf y Daniel Mazza Jiménez echan de menos de manera particularizada en sus motivos 10° y 14°, respectivamente.

25°) Que respecto de José Miguel Mazza Alaluf, en su considerando 10°, señala:

“Que los dichos del acusado José Miguel Mazza Alaluf, constituyen una confesión judicial prestada en los términos contemplados en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, ya que si bien admite que es gerente de la sucursal de Viña del Mar de la empresa Turismo Costa Brava; que trasladó en



algunas ocasiones desde Perú euros que recibió en el aeropuerto, hacia Los Ángeles EEUU, ingresando a ese país las divisas como provenientes de Chile, no obstante admitir que ese dinero nunca pasó físicamente por este país; y que viajó a Colombia a conocer cómo funcionaba el negocio; alega circunstancias con las cuales pretende eximirse de responsabilidad, señalando que estaba convencido de que el negocio era legítimo, y que no sabía que las empresas con las que trabajaban tenían relación con actividades de narcotráfico o lavado de dinero; alegaciones que no serán oídas, por resultar totalmente inverosímiles y contradictorias al mérito del proceso, por cuanto, obran en autos pruebas suficientes que permiten acreditar que el encausado tenía efectivamente conocimiento del carácter ilícito de las actividades que realizaba la empresa investigada, ya que, en su calidad de gerente de una de las sucursales, y encargado de transportar en muchas ocasiones dinero hacia Estados Unidos, debió necesariamente conocer las conductas irregulares cometidas a través de la empresa, descritas en considerandos anteriores.

Así lo señala el informe N° 1, elaborado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile, contenido en el anexo N° 5 de los documentos adjuntos a la querella, que establece que José Miguel Mazza Alaluf es uno de los sujetos encargados de transportar a Estados Unidos los euros recepcionados por Turismo Costa Brava desde Colombia o Perú. Agrega el informe que el encausado José Miguel es uno de los sujetos que tiene poder de firma respecto de la cuenta corriente que Turismo Costa Brava mantiene en el banco Israel Discount Bank de Nueva York.



Por otra parte, el informe citado reseña las interceptaciones telefónicas efectuadas a los investigados. señalando en sus páginas 19 y 20, que el día 25 de mayo de 2006, José Miguel Mazza le preguntó nerviosamente a su hermano Mauricio de dónde lo estaba llamando, solicitándole que lo llamara desde un teléfono público y no desde su celular. Asimismo, le dijo en esa conversación a Mauricio que lo dejara un tiempo sin viajar para estar más tranquilo, frente a lo cual Mauricio le respondió que este negocio no era para estar tranquilo. Agrega el informe que existe una llamada de fecha 03 de junio de 2006, en la que Luis Mazza le comunica al encausado José Miguel, que Mauricio Mazza pasó sin problemas por la revisión efectuada en el aeropuerto de Los Ángeles. Estados Unidos, y le pide que comunique esto a María Eugenia para mayor tranquilidad; todo lo cual permite presumir que el acusado José Miguel Mazza conocía el carácter ilícito del negocio y participaba activamente en las actividades desarrolladas por la empresa Turismo Costa Brava.

Consta asimismo, en las declaraciones de los trabajadores de la sucursal de Viña del Mar de Turismo Costa Brava, Beatriz Rojas Gonzalez, Julio Allendes Valdivia, Francisco Vargas Huerta, Juan Prieto Morales, Ricardo Henriquez Suárez, Humberto Gómez González y Luis Cabrera Rojas; que señalan que el acusado José Miguel Mazza era su jefe directo, y que viajaba frecuentemente a Estados Unidos, pero que no tenían claro el motivo de tales viajes.

Que, por otra parte, en su calidad de socio de las empresas investigadas, Turismo Costa Brava Limitada y Sociedad de Turismo, Valores e Inversiones Ltda, (Chilecambios Ltda.), el encausado José Miguel Mazza no pudo menos que conocer las actividades ilícitas de las empresas, siendo uno de los beneficiados



directos por la comisión del delito, lo cual él mismo reconoce señalando que obtenía cantidades de dinero mensuales en forma de bonos por las utilidades de las empresas, utilidades que tributariamente no fueron acreditadas, siendo ello precisamente sospechoso, toda vez que el asumir el alto riesgo de transportar físicamente elevadas cantidades de euros, ello no se vio curiosamente reflejado en la contabilidad, de donde se sigue naturalmente que los beneficios económicos de tales maniobras, no pasaron por la contabilidad societaria ni personal, no obstante lo cual, mantiene un considerable patrimonio en inmuebles varios, acciones, depósitos y otros. A lo anterior cabe agregar, no obstante haber sido invocado como una circunstancia en su favor, el hecho de haber viajado a Colombia para ver la operatoria de las casas de cambio de allá, deja en evidencia que ya en esa época, mantenía sospechas de que algo irregular ocurría en el citado país, pues como él mismo lo sostiene, los dineros provenientes de Colombia, por su conocido vínculo con el narcotráfico, resultan especialmente sospechosa en tal sentido.

Que de los argumentos antes vertidos, se concluye que las probanzas allegadas a los autos son suficientes para que el Tribunal alcance el estándar de convicción que exige el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal para tener por configurada la participación que a JOSÉ MIGUEL MAZZA ALALUF, le ha correspondido, en calidad de autor, en el delito de lavado de activos, previsto hoy en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913.”

26°) Que en relación a Daniel Mazza Jiménez, en el basamento 14° se explica:



“Que, con el mérito de lo consignado en el considerando que precede, esta sentenciadora tendrá al imputado Mazza Jiménez confeso en los términos del artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, en tanto acepta su participación en los hechos investigados, pero agrega elementos con los que pretende desvirtuar su responsabilidad en la comisión del ilícito, por cuanto admite haber transportado divisas desde Perú y Colombia hacia Estados Unidos, pero indica desconocer que tuvieran un origen ilícito, limitando su actuar sólo al transporte, siguiendo órdenes, desconociendo el funcionamiento del negocio de arbitraje de divisas y el origen de tales dineros; todo lo cual no será oído por cuanto sus dichos resultan inverosímiles y contradictorios al mérito del proceso, obrando pruebas suficientes para establecer que el acusado conocía el carácter ilícito de las actividades de Turismo Costa Brava; además, en sus declaraciones se observan inconsistencias, en especial respecto a sus viajes a Colombia, su regularidad y objetivos; dando detalles del negocio y de las personas involucradas en éste, reuniéndose personalmente con los propietarios de aquellas casas de cambio con las cuales operaban, permaneciendo un mes en Colombia a fin de aprender el “oficio” y obtener un certificado que le permitiera efectuar tales labores de transporte con seguridad y sin contratiempos, circunstancias todas que hacen imposible inferir que sólo ha tenido una participación como mero portador de valores, como él lo ha querido hacer parecer. Así su tarea de transportador de divisas, efectuando un elevado número de viajes con tal finalidad, se encuentra acreditada según lo expuesto en informe policial N° 1, adjunto como anexo N°5 de la querella; dichos de testigos, todos trabajadores de Turismo Costa Brava, de fojas 412,414,418, 727, 763, 840, 934, 982, 1116, 1119, 1124 y 1141.



Es más, según sus propios dichos y según se dijo, estuvo en Colombia en más de una ocasión, en una de ellas permaneciendo durante un mes, momento en el que incluso figura como empleado de una transportadora de dinero colombiana, la misma transportadora de la que eran empleados los mismos trabajadores de Representaciones Alfa, que transportaban el dinero a Chile y Perú y que se encuentran involucrados en el mismo ciclo de lavado de activos, según lo informado por la investigación Radicado 2810 I.A., realizada por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la República de Colombia. El mismo encausado acompañó en su oportunidad, a fojas 2203, documentos acreditando su función como portavalor de la empresa transportadora de valores internacionales Oceanic Value Transportation SA entre el 15 de febrero de 2006 y el 23 de mayo de 2006, detallando sus viajes, cuyo número difiere de lo declarado por él; además de lo atestiguado por Juan Carlos Vergara a fojas 449, quien expresa que el acusado estuvo en la casa de cambios de Colombia durante aproximadamente un mes para ver cómo operaba dicho negocio. A mayor abundamiento, en declaración de Marco Romero contenida en informe policial N° 72 de fojas 1729, éste indica que Daniel Mazza transportó divisas de Colombia a Chile, lo mismo expresa el informe comercial acompañado por el imputado a fojas 1586 del cuaderno de excarcelaciones.

Es menester agregar, que sus lazos de parentesco con los responsables de la organización en Chile, hace más inverosímil aún sus dichos, en tanto asevera haber sido un mero portavalor y desconocer el origen ilícito de las divisas transportadas. A este respecto, cabe hacer referencia a la interceptación



telefónica de fecha 7 de mayo de 2006 entre Mauricio Mazza y el encausado Mazza Jiménez, a propósito del cambio de envoltorio de los dineros transportados. ya explicado en extenso en el considerando sexto de esta sentencia, todo lo cual deja en evidencia el necesario conocimiento del origen ilícito de tales dineros, única circunstancia que justifica razonablemente el ánimo de ocultamiento.

Además, el mismo encausado y testigos han indicado que éste tenía funciones de responsabilidad dentro de una de las sucursales de Turismo Costa Brava, como Harold Pizarro a fojas 727 y José López Ayala a fojas 763, quienes indican que Daniel Mazza estaba encargado del local de Valparaíso; funciones de responsabilidad que adolecen de inconsistencias en las declaraciones del imputado en cuanto a sus funciones específicas y la remuneración que percibía por ello, dejando entrever que éste intentaba ocultar su real vínculo y conocimiento de las actividades ilícitas realizadas en la empresa investigada.

Que de los argumentos antes vertidos, se concluye que las probanzas allegadas a los autos son suficientes para que el Tribunal alcance el estándar de convicción que exige el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal para tener por configurada la participación que a DANIEL MOISÉS MAZZA JIMÉNEZ, le ha correspondido, en calidad de autor, en el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913.”

27°) Que como se ha evidenciado, la sentencia en examen no ha incurrido en las omisiones que reprochan los recursos de casación en la forma interpuestos en favor de José Miguel Mazza Alaluf y Daniel Mazza Jiménez, los que, por tanto, serán desestimados.



28°) Que como ya fue reseñado, las defensas de José Miguel Mazza Alaluf, Daniel Mazza Jiménez y Luis Mazza Olmos, también interponen sendos recursos de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, cuestionando que el fallo se refiera al sistema de valoración de la sana crítica y no al de valoración legal y afirmando que se vulneran los N°s 1 y 2 del artículo 488 porque no existe ningún medio de prueba legalmente producido que permita afirmar que ha tenido lugar real y probadamente un hecho típico de narcotráfico e igualmente se incumple el elemento de multiplicidad.

29°) Que sobre la referencia que efectúa el fallo a la sana crítica, tal equivocada mención carece de toda influencia en lo dispositivo del fallo, desde que igualmente la sentencia valora la prueba ciñéndose a las normas del Código de Procedimiento Penal, en particular a sus artículos 456 bis y 488 como expresamente lo indica el primer fallo de primera instancia.

En lo tocante al artículo 488, como se lee en el texto transcrito en el considerando 19° *at supra*, las presunciones en base a las cuales la sentencia impugnada establece el origen de los bienes objeto del delito de lavado de activos imputado a José Miguel Mazza Alaluf, Daniel Mazza Jiménez y Luis Mazza Olmos se fundan en hechos reales y probados y no en otras presunciones y, además, son múltiples, cumpliendo así los únicos extremos de los N°s. 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que pueden ser revisados por esta Corte como normas reguladoras de la prueba, según su uniforme y estable jurisprudencia.



No demostrándose entonces la infracción de una norma reguladora de la prueba, la causal 7a del artículo 546 debe ser desestimada, lo que importa que los hechos asentados en la sentencia en estudio no pueden ser alterados, hechos que se subsumen en el delito de lavados de activos como correctamente lo concluyen los jueces de la instancia, motivo por el cual la causal del N° 3 del citado artículo 546 también será rechazada.

Lo anterior es suficiente para desestimar estos recursos de casación en el fondo

30°) Que ya fue dicho que el apoderado de María Larraguibel Padilla interpone recurso de casación en el fondo, primero, por la causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, en subsidio, por las de los N°s. 1 y 7 del mencionado artículo 546, solicitando anular la sentencia recurrida y en la de reemplazo absolver a la acusada y, en subsidio, que se declare que Larraguibel Padilla no actuó con dolo, sino con negligencia inexcusable, rebajando su pena en dos grados.

31°) Que el recurso de casación en el fondo interpuesto en favor de María Larraguibel Padilla se funda en causales incompatibles y excluyentes que obstan para que esta Corte entre al estudio de cada una de ellas.

En efecto, la causal del N° 1 del artículo 546 importa aceptar la demostración de los hechos imputados así como su calificación y, por ende, reconocer la procedencia de una sanción penal, discutiendo únicamente la correcta determinación de la pena impuesta, mientras que mediante la causal N° 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal se controvierte precisamente



que los hechos atribuidos se puedan calificar como algún delito y, por ende, sancionar como tal.

La incongruencia referida resulta insalvable y es impropia de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, pues mediante una causal acepta calificar los hechos imputados como delito, mientras que por la otra lo retruca y, consiguientemente, mediante la última causal pide la absolución de la acusada mientras que a través de la primera solicita una rebaja de pena, conjunto de defectos que impide a esta Corte siquiera entrar al estudio y decisión de cada una de ellas.

Por todo lo expuesto, el recurso formulado por la defensa de Larraguibel Padilla tampoco podrá prosperar.

32°) Que fue expuesto antes que en favor de Mauricio Margenats Pizarro se interpone recurso de casación en la forma por la causal del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 N° 4 del mismo código, desde que en esta causa no se probó la existencia de un ilícito de tráfico de estupefacientes que pudiera servir de base al delito de Lavado de Activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letra a) de la ley 19.913, por el que fueron condenados los encausados.

33°) Que sobre este reclamo este fallo ya se ha hecho cargo en el motivo 19° *at supra*, al reproducir los razonamientos con los cuales la sentencia examinada sí dar por establecida la existencia de todos los elementos del delito de lavado de activos, incluyendo el que echa en falta el recurrente, siendo una discusión que no puede ser conocida ni resuelta mediante el recurso de casación en la forma, determinar si se infringió alguna norma en el establecimiento de los



hechos que configuran cada uno de esos elementos o en la corrección de subsumir esos hechos en la figura de lavado de activos.

Lo expresado es suficiente para desestimar este arbitrio.

34°) Que la defensa de Margenats Pizarro formula también recurso de casación en el fondo por la causal N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción del artículo 488 del mismo texto, desde que las presunciones no se fundan en hechos reales y probados, no tienen carácter directo ni concuerdan unas con otras, porque sólo existieron investigaciones por lavado de activos relacionados con narcotráfico, pero no condenas.

35°) Que en la forma que ha sido deducido el recurso de casación en el fondo en favor de Margenats Pizarro, no podrá prosperar, toda vez que sólo se ha invocado la causal 7a del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que supone la existencia de vulneración de normas reguladoras de la prueba, pero no se ha invocado además, la causal sustantiva necesaria para conceder lo pretendido por el recurrente -la absolución de Margenats Pizarro-, cual es la del número 3 de ese mismo artículo (en el mismo sentido, declarando la inadmisibilidad del recurso, SCS Rol N° 55059-16, de 7 de septiembre de 2016).

36°) Que, sin perjuicio de lo antes declarado, suficiente para desestimar el arbitrio, en el razonamiento 12° del primer fallo de primera instancia, no alterado por el que nos ocupa, establece la autoría de Margenats Pizarro en base a las siguientes consideraciones:

“Que, los dichos del acusado Mauricio Andrés Margenats Pizarra, constituyen una confesión judicial prestada en los términos contemplados en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, ya que si bien reconoce que



viajaba permanentemente transportando altas sumas de dinero a Estados Unidos desde Chile y Perú; que por instrucciones que recibía cambiaba las bolsas de dinero que tenían logo de Colombia y las ponía en bolsas transparentes; y que las divisas se ingresaban a Estados Unidos como dinero chileno; alega circunstancias con las cuales pretende eximirse de responsabilidad, señalando que él era sólo un empleado de la empresa; que no podía pensar que estaba ocurriendo algo irregular. ya que se le informó que el transporte era legal: y que el cambio de bolsas que contenían el dinero con el logo de Colombia era sólo una estrategia comercial; alegaciones que no serán oídas, por resultar inverosímiles y contradictorias al mérito del proceso, por cuanto, obran en autos pruebas suficientes que demuestran que el encausado tuvo la posibilidad de representarse el carácter ilícito de las actividades que realizaba la empresa investigada, ya que, atendido el número de veces en las que realizó viajes transportando divisas a Estados Unidos, lo cual, según el informe N° 1 contenido en el anexo N° 5 de los documentos adjuntos a la querella, ocurrió en 29 ocasiones; y en atención al alto monto de los dineros transportados, señalando el mismo informe en su página 30, que en total ingresó a Chile entre los años 2004 y 2006, un monto total de EU €14.062.785; y que además existen evidencias de que en algunas oportunidades no declaró en Aduanas el ingreso de las divisas a nuestro país, lo cual, además consta en una interceptación telefónica reseñada en el informe antes citado, en su página 13, en la que Mauricio Mazza Alaluf le pregunta al encausado Margenats si al momento de ingresar al país declaró el dinero que transportaba, señaló este último que no, y ante tal respuesta, Mazza le dijo textualmente "ah qué bueno"; lo cual, además, es concordante con lo señalado por el testigo Juan Carlos Vergara



Valderrama, quien refiere a fojas 418, que las instrucciones dadas por Mauricio Mazza eran "evitar la declaración de los dineros y su procedencia de origen", y que a fojas 449 señala que a veces viajaba acompañado por Mauricio Margenats debido a los montos transportados; todo lo cual da cuenta de que el encausado Margenats no pudo menos que sospechar la ilicitud del dinero transportado.

Sin perjuicio de lo razonado anteriormente, y si bien, en su oportunidad se dictó acusación contra el encausado Margenats considerando que éste obró con dolo directo, señalándolo como autor del delito contemplado en la letra a) del artículo 27 de la Ley N° 19.913, estima esta jueza que resulta aplicable a su respecto, la figura culposa establecida en el inciso cuarto de dicha disposición, toda vez, que a pesar de haber resultado acreditado que éste no pudo menos que conocer el origen ilícito de los dineros que transportaba, no quedó claramente demostrado que obró con dolo directo, es decir, con conocimiento inmediato de la ilicitud del negocio en el cual trabajaba, siendo más factible que éste haya obrado con negligencia inexcusable en la conducta desplegada, por cuanto no ejercía un cargo directivo dentro de la empresa, sino únicamente funciones de trabajador dependiente, lo cual concuerda con los dichos de los demás encausados, así como con el exiguo patrimonio del acusado Margenats, y la reducida posición frente al dominio del hecho que éste ostentaba en relación a los demás acusados.

Que, de los argumentos antes vertidos, se concluye que las probanzas allegadas a los autos son suficientes para que el Tribunal alcance el estándar de convicción que exige el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal para tener por configurada la participación que a MAURICIO ANDRÉS MARGENATS PIZARRO, le ha correspondido, en calidad de autor, en el delito de lavado de



activos, previsto en el hoy artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913, cometido con negligencia inexcusable en los términos de! inciso cuarto de dicha disposición.”

37°) Que como se observa en el extracto transcrito, las presunciones en base a las cuales la sentencia establece los elementos de delito imputado a Margenats Pizarro se fundan en hechos reales y probados y no en otras presunciones y, además, son múltiples, cumpliendo así los únicos extremos de los N°s. 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que pueden ser revisados por esta Corte como normas reguladoras de la prueba, según su uniforme y estable jurisprudencia.

Si esas presunciones cumplen con ser precisas, directas y concordantes, como lo demandan los N°s. 3° a 5° del mencionado artículo 488, corresponden a interrogantes que esta Corte no puede responder, desde que como reiteradamente se ha explicado, ello está reservado únicamente a la fundada y razonada valoración y ponderación de los jueces de las instancias.

Por dichas reflexiones el arbitrio formulado en favor de Margenats Pizarro será desestimado.

38°) Que en favor de Yieninson Yapur Cortez se interpone recurso de casación en la forma por la causal N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 500 N°s. 4 y 5 y 527 del mismo código, explicando el recurrente que el fallo omite pronunciarse sobre el origen lícito de la suma de dinero recuperada y respecto a la ausencia de un delito previo, delito precedente o delito base como supuesto típico del lavado de dinero. Además la sentencia cita y condena en razón de una norma que no resulta aplicable al caso. En el mismo sentido, el fallo impugnado omite toda



consideración respecto de la configuración típica de lo que denomina narcotráfico. Finalmente, la sentencia recurrida omite resolver la petición subsidiaria, en orden a rebajar en un grado la pena impuesta, por aplicación del artículo 68 bis en relación al artículo 11 N° 6 del Código Penal.

39°) Que en lo concerniente al reclamo que versa sobre la omisión del fallo de pronunciamiento sobre el origen lícito de la suma de dinero recuperada y respecto a la ausencia de un delito previo o base como supuesto típico del lavado de dinero, además de obviar toda consideración respecto de la configuración típica de lo que denomina narcotráfico, tal reproche será desestimado, pues en el motivo 4° del segundo fallo se exponen los razonamientos en torno a esos asuntos que sí fueron desarrollados, sin que pueda a esta Corte examinar la corrección de los mismos mediante este recurso de casación en la forma.

40°) Que, en efecto, en el mencionado considerando 4° se explica:

“Si bien en la oportunidad procesal correspondiente, se estimaron los hechos descritos como constitutivos de las figuras de las letras a) y b) del artículo 27 de la Ley N° 19.913, respectivamente, siendo la sentencia definitiva la instancia en la cual el Tribunal realiza una adecuada calificación jurídica de los hechos comprobados en la litis, esta sentenciadora considera que, apreciados éstos en su conjunto, pueden ser subsumidos en el delito de lavado de activos previsto en la letra a) del artículo 27 de la Ley N° 19.913, que establece que comete este ilícito quien de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico



ilícito de estupefacientes [...], o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.

En tal sentido, las voces "ocultar o disimular" encierran la idea de no develar el origen de una cosa, o mostrarlo de manera diferente a la realidad, o sólo en parte, con un despliegue de comportamientos activos de cualquier índole, no solo en sentido material, pudiendo ser ello ficto, precisamente mediante el abuso de diversas formas jurídicas, que en apariencia, podían estimarse ajustadas a derecho, como en principio puede serlo el arbitraje de divisas realizado.

En cuanto la exigencia subjetiva, el legislador ha utilizado la voz "a sabiendas" lo que presupone el necesario conocimiento del origen de tales dineros, no pudiendo estimarse que los encausados en esta cuerda ignoraban dicho origen ilícito proveniente del narcotráfico, atendida las calidades que ellos revestían, abogado y empleado de confianza de los mismos, maniobras realizadas por éstos que les permitió en definitiva que sus clientes y empleadores, respectivamente, pudieran gozar del beneficio económico de dichos dineros, ya lavados.

Por otra parte, el objeto material del delito en análisis, en el caso de autos, son los dineros que son lavados o blanqueados, los que deben provenir directa o indirectamente de la comisión de algunos de los delitos base previstos en la ley, en el presente caso, del narcotráfico, elementos todos, objetivos y subjetivos que se estiman probados con el mérito de lo que se analizará a continuación.

En efecto, ha quedado acreditado en la cuerda principal, de la cual emana este cuaderno secreto, que unos sujetos, en sus calidades de socios y empleados



de la empresa Turismo Costa Brava S.A. y otras empresas relacionadas con ésta, recibían grandes cantidades de euros de alta denominación, provenientes de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, los cuales les eran enviados desde Colombia, primero, a través de Perú, y después, directamente desde Colombia, para transportarlos a Estados Unidos, y desde ahí, convertirlos a dólares y devolverlos a Perú, o directamente a Colombia, vía transferencias electrónicas realizadas desde cuentas bancarias que poseía la empresa Turismo Costa Brava en el extranjero, o bien, devolvían el dinero realizando inversiones en empresas tecnológicas o en corredoras de bolsa a nombre de las empresas colombianas, todo lo cual con la finalidad de disimular su origen ilícito.

Establecido lo anterior, también se encuentra establecido en el proceso que un sujeto, abogado de los procesados en la causa por lavado de activos cuyo origen es el tráfico ilícito de estupefacientes, citada precedentemente como cuaderno principal, mediante un mandato otorgado por éstos, a espaldas del administrador provisional de los bienes objeto de la investigación, cuya existencia conocía fehacientemente atendida su calidad de abogado de los mismos, habiéndose entrevistado con éste, a sabiendas del origen ilícito de los bienes, entre ellos el dinero por él recuperado, conociendo perfectamente la situación procesal de sus representados, uniéndolos además una antigua amistad, realizó operaciones tendientes a recuperar dineros desde Perú, escondiendo este hecho al administrador provisional. El referido sujeto, mediante diversas gestiones, obtuvo dicha devolución y posteriormente procedió a trasladar las divisas desde Perú a Chile, no informando de ello a las autoridades pertinentes, particularmente al Servicio Nacional desional (sic.). El referido sujeto, mediante diversas



gestiones, obtuvo dicha devolución y posteriormente procedió a trasladar las divisas desde Perú a Chile, no informando de ello a las autoridades pertinentes, particularmente al Servicio Nacional de Aduanas infringiendo el artículo 4° de la Ley 19.913, además de la UAF, instruyendo a quien fue Oficial de Cumplimiento ante dicha institución a comunicar tal circunstancia, lo que era del todo improcedente, procediendo de esta forma a ocultar su origen, destino y utilización, con dolo manifiesto atendidas las circunstancias que ello ocurrió y que puede desprenderse de las pruebas indiciarias que se han consignado.

En efecto, la conclusión antedicha descansa en las distintas probanzas allegadas al proceso, en particular, el informe policial N° 148 de fojas 31, que detalla acuciosamente los movimientos del sujeto aludido en orden a lograr identificar cómo se realizó el traslado del dinero, señalando que éste sabía que el dinero provenía de actividades vinculadas a personas (Luis y José Mazza, además de Jorge Moyana Quiroz) detenidas y procesadas por el delito de lavado de dinero, concluyendo el citado informe que este sujeto contribuyó a dar continuidad al delito de lavado de dinero investigado por la Brigada, y que dio lugar a la detención del denominado Clan Mazza en la operación "Suspiro Europeo". Con la recuperación del dinero, este sujeto impidió la incautación o decomiso del mismo, dineros que debieron haber sido registrados en la contabilidad de la empresa intervenida, lo que de hecho no ocurrió ex profeso debido a su actuar doloso.

A ello cabe agregar el oficio de la UAF de fojas 483, que indica que la explicación sobre el origen de fondos que ingresan desde el extranjero, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 19.913, debe ser recabada



directamente por el Servicio Nacional de Aduanas, en el acto de ingreso y remitida sólo por ese Servicio a la Unidad de Análisis Financiero, lo cual no fue posible, ya que, el encausado, que ingresó al país con dicha elevada suma de dinero, no lo declaró ante Aduanas con el claro propósito de ocultarlo, de donde sólo cabe desprender la malicia en su actuar.

Ha quedado también comprobado, que la operación que supuestamente generó el dinero que fue recuperado mediante la actuación del abogado referido, no fue registrado en la contabilidad de la empresa, ni reportado a la Unidad de Análisis Financiero, según lo informado por el administrador provisional de Turismo Costa Brava S.A. a fojas 19, y en su declaración de fojas 337, ignorando éste la procedencia de los casi US\$500.000 de la supuesta operación de arbitraje de divisas frustrada. Dicho testigo agrega que el abogado tenía provisional (sic.) de Turismo Costa Brava S.A. a fojas 19, y en su declaración de fojas 337, ignorando éste la procedencia de los casi US\$500.000 de la supuesta operación de arbitraje de divisas frustrada. Dicho testigo agrega que el abogado tenía conocimiento de la administración provisional de la empresa Turismo Costa Brava y que se entrevistó con él, quedando así de manifiesto que, a sabiendas, este último procedió a participar activamente en el ciclo de lavado de activos iniciado por el clan Mazza, sus clientes, mediante la recuperación y traslado de las divisas desde Perú hacia nuestro país, optando por omitir informar la existencia de estos bienes a las autoridades competentes de nuestro país, obstaculizando su incautación y consiguiendo de paso que, sus clientes y terceros, se beneficiaran del ingreso y ocultación tales dineros.



En el caso de autos, se oculta o disimula, en primer lugar, el origen ilícito de los bienes, toda vez que el encausado recuperó dinero en el vecino país de Perú que supuestamente provenía de una operación de "arbitraje de divisas" inconclusa, dinero que supuestamente había sido transferido desde la cuenta corriente que la empresa Turismo Costa Brava S.A. mantenía en el Banco Chase Manhattan, hacia la cuenta de la empresa peruana Global Exchange, por una supuesta transacción de arbitraje de divisas, operación idéntica a las investigadas por dicho ilícito en la causa principal, por lo que resulta imposible separar la operación de recuperación de este dinero, de lo investigado en la cuerda principal de la causa, en tanto el delito en comento, por su naturaleza misma, admite la participación de diversas personas, y así acontece en la mayoría de los casos, en distintas etapas, unidas en un complejo entramado de operaciones, con visos de legalidad, que en definitiva no lo son, ocultas, y al margen de toda normativa legal.

En tal sentido, y como lo expresan los informes policiales acompañados en autos, amén del tenor de la acusación fiscal dictada contra Luis Mazza y otros por el delito de lavado de activos cuya copia rola agregada a fojas 578, ha quedado establecido que, a través de la sociedad Turismo Costa Brava y empresas asociadas, los acusados participaban en una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según consta de los procesos llevados en el extranjero y que redundaron en la detención de personas vinculadas con los encausados, conclusión a la que se arriba por cuanto la única posibilidad cierta es que tengan dicho origen, por las personas involucradas, los países involucrados, conocidamente productores y vecinos de productores de drogas, cercanía fronteriza con nuestro país, ocultamiento del ingreso de tales divisas, el no registro



en las respectivas contabilidades, la no justificación de otra fuente de ingresos de tal volumen de divisas diversa del narcotráfico, personas que en conjunto, simulaban operaciones de cambio de dinero denominadas "arbitraje de divisas", trasladando grandes sumas de divisas, principalmente euros de alta denominación, desde Perú y Colombia, los que luego vendían en Estados Unidos. Una vez pagada esa operación en Estados Unidos, los encausados procedían a depositar el dinero desde su cuenta bancaria norteamericana a Colombia y Perú, directamente a las empresas relacionadas o a través de otras, completando así el ciclo del lavado de activos. Ésa es precisamente la cuenta corriente desde donde salió el depósito por US\$ 500.000 realizado a la empresa Global Exchange en Perú en marzo de 2007, y que luego recuperaría, descontados los gastos operacionales -quedando US \$499.192,72-, el abogado de los encausados en la causa principal, haciéndose así parte e interviniendo de manera activa del mismo ciclo de lavado de activos.

Igualmente, se configura la exigencia establecida en la parte final de la letra a) del artículo 27 de la citada ley, en cuanto se ocultan o disimulan los bienes a sabiendas de su origen ilícito, toda vez que ha quedado comprobado en el proceso que el dinero recuperado desde Perú al ingresar a Chile no se declaró a la autoridad competente, la Aduana de Chile; no obstante que con posterioridad, y una vez descubierto el ingreso del dinero, se le quiso dar una apariencia de legalidad al informar, con meses de desfase y por una persona no autorizada al efecto, quien a esa fecha se encontraba privado de libertad precisamente por lavado de activos, a la Unidad de Análisis Financiero de su ingreso, según consta en oficio de fojas 483.



Ha quedado establecido del mismo modo, que una vez que trascendió la recuperación del dinero objeto de esta investigación, el sujeto procedió a realizar maniobras con la intención de ocultar tanto el dinero en sí, como el destino dado a los mismos. Así, consta en el proceso una rendición de cuentas a la que se adjuntan boletas de honorarios que no dicen relación con la fecha en que se habrían prestado los servicios o derechamente, es decir absolutamente extemporáneas y con el claro propósito de justificar gastos realizados; además se presentan con idéntico fin, boletas correlativas de honorarios, lo que hace presumir que fueron confeccionadas en una sola oportunidad y justamente con el objeto de intentar justificar la utilización del dinero traído desde Perú, revelando un claro propósito de ocultar o disimular el verdadero destino de los dineros recuperados.

Es más, las inconsistencias aumentan al comprobar que la rendición de cuentas de la utilización de este dinero, agregada a fojas 427, está fechada a 10 de abril de 2008 y con fecha 13 de agosto de 2008, en declaración policial anexada a fojas 273 como parte del informe policial N° 148, Luis Mazza Olmos, quien realizó el encargo de recuperación de las divisas, expresa que no ha recibido detalle formal de los gastos efectuados por el señor Yapur, por cuanto la tarea "no está completada", reiterando luego que no ha recibido documento oficial de rendición de cuentas. Posteriormente, en su atestado de fojas 490 admite que dicho documento se firmó con fecha posterior a la señalada en aquél, "cuando se desencadenaron todos los problemas", según sus propias palabras.

Además, y en relación al segundo encausado en la presente causa, ha quedado demostrado que un sujeto, empleado de confianza de los procesados



por el delito de lavado de activos, que se encontraban privados de libertad en la causa principal, que seguía prestando servicios a una de las empresas cuestionadas y a esa fecha sometida a administración provisional, fue encomendado para realizar ciertas diligencias con el dinero recuperado en Perú, con posterioridad a su internación, específicamente distribuyendo diversas sumas de dinero y realizando gastos según las instrucciones de los directivos de Turismo Costa Brava, procesados privados de libertad por el delito de lavado de activos al tiempo de esta operación, por lo que éste conocía o no podía menos que saber, el origen ilícito de tales dineros. De este modo, y de acuerdo a las instrucciones recibidas, procedió a facilitar los medios para que estos dineros pudieran ser utilizados, recibiendo de quien los tenía, y repartiéndolos conforme a dichas instrucciones. Lo anterior queda refrendado por los dichos de los testigos Mauricio Margenats de fojas 358, de Marlene Vásquez de fojas 447, quienes señalan haber recibido determinadas sumas de dinero de parte del encausado Tapia; el testimonio de fojas 1420 de Luis Mazza, quien le admite haberle hecho el encargo; el informe policial N° 148, que añade que ese sujeto conoce el origen de los dineros que se encontraban retenidos en Perú, que inclusive, y a pesar de seguir trabajando en esa casa de cambio, no informa a quien actualmente administra dicha sociedad, porque según éste señala "no corresponde hacerlo", defendiendo a ultranza a su empleador, sosteniendo que, por una parte, actuó solo por solidaridad y porque Luis Mazza estaba sólo en Chile, pero de igual forma recibió la suma de 10.000 dólares, en compensación de sus servicios.

Con el mérito de lo relacionado, ha quedado así establecida la configuración del delito de la letra a) del artículo 27 de la Ley N° 19.913, en sus



exigencias objetivas y subjetivas, en tanto se ha demostrado el ocultamiento o disimulo de los bienes, su origen vinculado al narcotráfico, así como el necesario conocimiento de dicho origen ilícito de los bienes y su ocultamiento o disimulo.”

41°) Que respecto a la protesta porque la sentencia obvia la aplicación de la ley más favorable al acusado por las modificaciones a la Ley N° 19.913 por la Ley N° 20.818 de 18 de febrero de 2015, que incluyó una regla de proporcionalidad, que conlleva que la pena asignada al delito de lavado no puede ser mayor a la asignada al delito base, al igual como se dijo en el motivo 18° *at supra*, tal omisión carece de influencia en lo dispositivo del fallo, pues la sanción impuesta al acusado Yapur Cortez, de todos modos se encuentra dentro del marco de la pena del delito de tráfico de drogas, sea en su texto correspondiente a la Ley N° 19.366 o a la posterior Ley N° 20.000.

42°) Que en cuanto se reclama porque la sentencia recurrida omite resolver la petición subsidiaria, en orden a rebajar en un grado la pena impuesta, por aplicación del artículo 68 bis en relación al artículo 11 N° 6 del Código Penal, tal omisión carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que, incluso de ser efectiva, la pretendida rebaja constituye sólo una facultad para los jueces de instancia, razón suficiente para desestimar este motivo de la causal de casación interpuesta.

43°) Que la defensa de favor de Yieninson Yapur Cortez dedujo también recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 488 N°s. 1 y 2 del mismo código, 1, 14 y 15 N° 1 del Código Penal y 27 letra a) de la Ley N° 19.913, señalando que se vulnera el N° 1 del citado artículo 488 en cuanto el



hecho de haber existido investigaciones por supuestos delitos de tráfico de estupefacientes no puede consistir en una presunción para acreditar la existencia del delito base que se funde en hechos reales y probados. Del mismo modo se infringe la primera parte del N° 2 de la misma disposición, en cuanto la concurrencia del hecho básico del narcotráfico no se basa en presunciones múltiples, sino que, en una sola presunción, o incluso, en menos que eso como lo señala el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal, pues se trata de informes policiales que tienen el mérito de un antecedente que el juez apreciará conforme a las reglas generales.

Agrega que la sentencia ha calificado como delito de lavado de activos un hecho que es atípico y que la ley no considera como delito, desde que no ha existido el delito base de tráfico de estupefacientes, el cual se dio por acreditado con infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

44°) Que en lo tocante al artículo 488, como se lee en el texto transcrito en el considerando 40° *at supra*, las presunciones en base a las cuales la sentencia impugnada establece el origen de los dineros objeto del delito de lavado de activos imputado a Yapur Cortez se fundan en hechos reales y probados y no en otras presunciones y, además, son múltiples, cumpliendo así los únicos extremos de los N°s. 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que pueden ser revisados por esta Corte como normas reguladoras de la prueba, según su uniforme y estable jurisprudencia.

No demostrándose entonces la infracción de una norma reguladora de la prueba, la causal 7a del artículo 546 debe ser desestimada, lo que importa que los hechos asentados en la sentencia en estudio no pueden ser alterados, hechos que



se subsumen en el delito de lavados de activos como correctamente lo concluyen los jueces de la instancia, motivo por el cual la causal del N° 3 del citado artículo 546 también será rechazada.

Lo anterior es suficiente para desestimar este recursos de casación en el fondo

45°) Que en favor de Allans Tapia Moreira se deduce recurso de casación en el fondo por las causales de los N°s. 3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 456 bis, 457, 482 y 488 N° 1 y 2 de dicho Cuerpo Legal, ya que se configuran estas causales, en opinión del recurrente, por señalar la sentencia que el sistema de valoración es el de la sana crítica. Por otra parte, de todos los antecedentes que obran en el proceso no existe alguno que diga relación con el supuesto delito base de tráfico de drogas, no basándose las presunciones en hechos reales y probados, sin tampoco ser múltiples, existiendo más bien una presunción de presunción. Añade que no hay antecedentes para considerar la declaración de Tapia Moreira como una confesión calificada de conformidad al artículo 482 del Código de Procedimiento Penal.

49°) Que respecto al mencionado artículo 456 bis, como ha sido uniforme la jurisprudencia de esta Corte, *“no constituye una norma reguladora de la prueba, sino sólo una disposición que indica a los jueces el grado de convicción que deben lograr para dictar sentencia condenatoria, pero no señala el peso de la prueba o rechaza un medio probatorio que la ley permita o admite uno que repudia o modifica, negando o alterando el valor probatorio que ésta asigna a los diversos medios establecidos”* (SSCS Rol N° 5.000-17 de 29 de mayo de 2017 y Rol N° 12.931-18 de 25 de septiembre de 2020).



En relación al artículo 457, éste sólo enumera los medios por los cuales se acreditan los hechos en un juicio criminal, sin que se haya explicado en el arbitrio -ni tampoco lo advierta esta Corte- de qué manera este precepto fue vulnerado por los sentenciadores con su decisión.

Y en lo tocante al artículo 482, el recurrente sostiene que Tapia Moreira, en su declaración no confiesa participación en el delito de lavado de activos, sin embargo, como lo indica el motivo 8° del segundo fallo de primera instancia, sí *“admite haber recibido dinero de parte de sus ex empleadores, procesados por el delito de lavado de activos, la suma de US\$10.000, y haber recibido igualmente otros montos e instrucciones sobre la repartición de éstos”*, pero alega circunstancias con las que pretende desvirtuar su responsabilidad penal, como el hecho de que desconocía el origen de esos fondos, circunstancias que el tribunal no tiene por probadas por las razones que latamante desarrolla en el mismo basamento 8°, lo que constituye precisamente una estricta aplicación de lo prescrito en el citado artículo 482.

En lo concerniente al artículo 488, como se lee en el texto transcrito en el considerando 40° *at supra*, las presunciones en base a las cuales la sentencia impugnada establece el origen de los bienes objeto del delito de lavado de activos imputado a Tapia Moreira se fundan en hechos reales y probados y no en otras presunciones y, además, son múltiples, cumpliendo así los únicos extremos de los N°s. 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que pueden ser revisados por esta Corte como normas reguladoras de la prueba, según su uniforme y estable jurisprudencia.



Y sobre la referencia que efectúa el fallo a la sana crítica, tal equivocada mención carece de toda influencia en lo dispositivo del fallo, desde que igualmente la sentencia valora la prueba ciñéndose a las normas del Código de Procedimiento Penal, en particular a sus artículos 456 bis y 482 como expresamente lo indica el segundo fallo de primera instancia.

No demostrándose entonces la infracción de una norma reguladora de la prueba, la causal 7a del artículo 546 debe ser desestimada, lo que importa que los hechos asentados en la sentencia en estudio no pueden ser alterados, hechos que se subsumen en el delito de lavados de activos como correctamente lo concluyen los jueces de la instancia, motivo por el cual la causal del N° 3 del citado artículo 546 también será rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se rechazan** los recursos de casación interpuestos por los apoderados de Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, Luis Alberto Mazza Olmos, José Miguel Mazza Alaluf, Daniel Moisés Mazza Jimenez, María Eugenia Larraguibel Padilla, Mauricio Andrés Margenats Pizarro, Allans Antonio Tapia Moreira y Yieninson Yapur Cortez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el rol Criminal N° 276-2016, la que no es nula.

Acordada con el voto en contra de los Abogados Integrantes Sres. Munita y Abuaud, sólo en cuanto se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Yapur Cortez, por la causal del N° 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por infracción de los artículos 1, 14 y 15 N° 1



del Código Penal y 27 letra a) de la Ley 19.913, por las siguientes consideraciones:

1º) Que en los hechos asentados en el considerando 3º del fallo de primer grado que condena a Yapur Cortez -no modificados en alzada-, no se menciona específicamente que la suma remesada de US\$499.192,72.- desde Perú a Chile, por encargo de Luis Mazza Olmos y José Mazza Alaluf, proviniera, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la Ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas vigente a la sazón, a diferencia de lo que se establece respecto del resto de los procesados.

2º) Que, en efecto, únicamente se señala que ese dinero “*provenía de una supuesta operación inconclusa entre las referidas sociedades [Sociedad Turismo Costa Brava S.A. y Global Exchange], aparente arbitraje de divisas que es objeto de investigación en el proceso por vía principal, que no figura en los registros contables de la sindicada administración y que había quedado pendiente como consecuencia de la detención de los encausados en Chile.*”

Esa omisión no puede ser sustituida por los razonamientos desarrollados con posterioridad en el considerando 4º del fallo del *a quo*, con los cuales se busca justificar la calificación jurídica otorgada a esos hechos ya asentados y, en particular, la concurrencia de todos los elementos típicos del delito de lavado de activos, entre otros, su objeto material.

3º) Que sin dicha vinculación objetiva entre un delito de tráfico de droga y las sumas transportadas por Yapur Cortez, falta un requisito típico esencial del delito en estudio, por lo que al ser sancionado en esas circunstancias, se ha



cometido un errónea aplicación de los artículos 1, 14 y 15 N° 1 del Código Penal y 27 letra a) de la Ley 19.913, lo que constituye la causal invocada del N° 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, procediendo por tanto anular el fallo impugnado para dictar la correspondiente sentencia de reemplazo absolutoria que enmiende dicho yerro.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Munita.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 16480-18

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Ricardo Abuaud D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 06/11/2023 15:01:30

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 06/11/2023 15:01:30

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 06/11/2023 15:01:31

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 06/11/2023 14:45:58



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 06/11/2023 15:24:09

En Santiago, a seis de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 06/11/2023 15:24:10



Santiago, seis de noviembre de dos mil veintitrés.

Resolviendo las solicitudes de 23, 24 y 25 de junio de 2022:

Vistos y teniendo únicamente presente:

Que la incorporación de la presente causa en tabla para proceder a su vista depende, de conformidad al artículo 105 del Código Orgánico de Tribunales, al Presidente de esta Corte, por lo que el que esto se haya realizado transcurrido más de tres años desde que este expediente ingresó a este Tribunal no responde al abandono u olvido de la persecución sino exclusivamente a la acumulación de procesos pendientes de conocimiento con preferencia al presente, agravado por la situación de pandemia por todos sabida, todo lo cual impide calificarlo como una paralización de la prosecución del procedimiento reglada en el artículo 96 del Código Penal.

Por las razones señaladas y normas citadas, **se rechaza** la petición de prescripción de la acción penal solicitada en los escritos de 23, 24 y 25 de junio de 2022.

Rol N° 16480-2018

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Ricardo Abuauad D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO

Fecha: 06/11/2023 15:01:27

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO

Fecha: 06/11/2023 15:01:28

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO

Fecha: 06/11/2023 15:01:29

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 06/11/2023 14:45:57

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE

Fecha: 06/11/2023 15:24:07



XXXPXJQHXC

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, seis de noviembre de dos mil veintitrés.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a seis de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

MARCELO DOERING CARRASCO
MINISTRO DE FE
Fecha: 06/11/2023 15:24:07

